

Las nuevas democracias excluyentes de los países capitalistas periféricos. El caso de la República Argentina

Alfredo R. Pucciarelli

Resumen

Este trabajo corrige la interpretación central que sobre la naturaleza y función de la democracia argentina se intentó elaborar anteriormente. Ahora la interrogante cambió otorgando elementos suficientes para transformar la hipótesis. Investigaciones posteriores referidas a la relación entre práctica política y gestión estatal del gobierno consagrado en las elecciones presidenciales de fines de 1999, obligaron al autor a elaborar una conclusión diferente: el régimen democrático reconstruido a comienzos de la década de los ochentas superó las indefiniciones de la etapa de transición y logró una razonable estabilidad en el momento actual, de un modo paradójico, negando su contenido. Ya no se piensa en la existencia de democracias "bobas", imperfectas, impotentes o de baja intensidad; tampoco en democracias sólo corruptas e ineficientes enganchadas por complicidad o comprometidas por omisión con la degradación social, sino en otra cosa sensiblemente diferente: la expansión de un nuevo entramado político institucional que, acompañando la exclusión social con la expropiación y el despojo de todo aquello que constituye la identidad social, cultural y política de los sectores subalternos, se transforma en un estratégico instrumento de producción del proceso de declinación económica, decadencia social y descomposición institucional que ha venido sufriendo el país durante los últimos 25 años. Por esa causa, muchos de los elementos hipotetizados en el trabajo anterior ahora volverán a estar presentes, pero esta vez serán reubicados, redefinidos y resignificados en función de este nuevo intento de explicación.

Abstract

This work amends the central interpretation that on the nature and function of the Argentine democracy was attempted to elaborate previously. Now the question changed granting sufficient elements to transform the hypothesis. Subsequent investigations referred to the relationship between practical political and state management of the government consecrated in the presidential elections of 1999, compelled to the author to elaborate a different conclusion: the democratic regime reconstructed around the beginning of the decade of the eighties surpassed the non-definitions of the transition stage and achieved a reasonable stability in the current moment, of a paradoxical manner, denying its contained. No longer it is thought about the democracies existence "silly", imperfect, impotent or of intensity decrease; continues the author, either in only corruptive and inefficient democracies hooked by complicity or committed by omission with the social degradation, but in something else sensibly different: in the expansion of a new institutional political studding that, accompanying the social exclusion with the expropriation and the spoliation of all that constitutes the social, cultural and political identity, of the subordinate sectors, that becomes a strategic production instrument of the economic decline process, social decadence and institutional decomposition that it has come suffering the country during the last 25 years. For that cause, many of the hypothetical elements in the previous work will return now to be present, but this time they will be relocated, redefined and resignified in function of this new explanation attempt.

La democracia excluyente

Este trabajo corrige la interpretación central que sobre la naturaleza y función de la democracia argentina intenté elaborar en un artículo anterior (Pucciarelli, 2000). En esa ocasión definí el tema con una interrogante y bajo la forma de una disyuntiva:

Estudios Latinoamericanos, nueva época, año VIII, núm. 16, julio-diciembre de 2001.

¿la democracia actual de la Argentina es, como se desprende de la mayoría de los análisis existentes, incapaz de generar las condiciones sociales mínimas de su buen funcionamiento, o es la generadora de un régimen político cómplice del nuevo modelo de dominación social neoliberal, como parece sugerir el análisis más detallado del rol que ha venido cumpliendo en la gestación y legitimación de ese modelo implantado en el país durante la década de los noventa? Los datos empíricos obtenidos en una detallada investigación del proceso electoral de fines de 1999, me aportaron elementos suficientes para transformar el segundo término de la interrogación en una nitida conclusión: el contenido y los procedimientos políticos de la democracia han jugado un rol fundamental en la aceptación y legitimación, por medio del consenso electoral, de las profundas reformas estructurales implantadas durante ese periodo.

Investigaciones posteriores referidas a la relación entre práctica política y gestión estatal del gobierno consagrado en esas elecciones, iniciado en el año 2000, me han obligado a elaborar una conclusión sensiblemente diferente: el régimen democrático reconstruido a comienzos de la década de los ochenta ha superado las indefiniciones de la etapa de transición y ha logrado una razonable estabilidad en el momento actual, de un modo paradójico, negando su contenido. Ya no pensamos en la existencia de democracias "bobas", imperfectas, impotentes o de baja intensidad; tampoco en democracias sólo corruptas e ineficientes enganchadas por complicidad o comprometidas por omisión con la degradación social, sino en otra cosa sensiblemente diferente: la expansión de un nuevo entramado político institucional que, acompañando la exclusión social con la expropiación y el despojo de todo aquello que constituye la identidad social, cultural y política de los sectores subalternos, se transforma en un estratégico instrumento de producción del proceso de declinación económica, decadencia social y descomposición institucional que ha venido sufriendo el país durante los últimos 25 años. Por esa causa, muchos de los elementos planteados como hipótesis en el trabajo anterior volverán a estar presentes, pero ahora serán reubicados y resignificados en función de este nuevo intento de explicación.

En este caso, el término "expropiación" no se refiere a la ganancia que surge de la explotación del trabajo ajeno, propia de la organización social de la producción capitalista, ni a alguna otra forma de apropiación "tradicional" asociada a ella, sino al "despojo", es decir a la exacción de bienes ya obtenidos y a la eliminación de conquistas sociales ya consagradas, considerados una parte del sistema de pertenencias de los sectores sociales expropiados, los "despojados". Aunque la mayor cantidad de bienes expropiados son de carácter económico (ocupación, salario directo, salario indirecto, etc.), los procesos que culminan en la exacción y el despojo no son procesos predominantemente económicos, sino fundamentalmente político-estatales, y esto por dos razones. En primer lugar, porque la mayoría de esos bienes y beneficios obtenidos fueron producto de la concepción de integración social y desarrollo industrial mediante la ampliación del mercado interno que puso en marcha el gobierno peronista, después de la segunda posguerra. En segundo lugar, porque durante el periodo posterior, la adhesión

al líder, a la doctrina justicialista y la participación en las variadas formas de resistencia civil y política, constituyeron el pilar fundamental de la asombrosa fortaleza con que los sectores populares y la clase obrera defendieron sus conquistas de las amenazas permanentes de expropiación que ejercieron cambiantes coaliciones civiles, militares y cívico-militares, después del golpe militar de 1955.

El gran éxito de la fuerte ofensiva empresarial y estatal contra las conquistas de las clases populares, profundizado durante el periodo democrático, se debe precisamente a que pudo prolongar y consolidar los grandes objetivos del triunfo político militar de la última dictadura, librando posteriormente una prolongada y muy compleja confrontación ideológica y política con las organizaciones populares en todos los ámbitos de la sociedad.

La historia de la larga y exitosa contraofensiva llevada a cabo por el bloque social aglutinado en torno a la derecha empresarial-militar del periodo de la dictadura y del eje político-empresarial neoliberal después de la restitución democrática, así como su relación con los grandes cambios operados en el contexto internacional, no ha comenzado a relatarse todavía. Tampoco se ha analizado el papel que ha jugado el régimen político del sistema propiamente democrático en la realización de esos objetivos, eliminando resistencias potenciales y haciendo definitivamente viable un severo plan de reformas estructurales que, a pesar de atentar directamente contra el sistema de intereses económicos, sociales, políticos y culturales de los sectores populares, fue impuesto sin generar oposiciones serias ni conflictos perdurables. Esa ausencia explica, seguramente, el hecho de que no se haya visualizado todavía un hecho fundamental para la adecuada comprensión de la relación entre sociedad y política en nuestra época: a diferencia de otras formas de exacción del trabajo ajeno, la "expropiación" genera "despojo" a través de mecanismos explícitos que no pueden mantenerse velados ni ocultos, como sabemos que ocurre con los primeros. Por esa razón, el elenco gubernamental ha debido desarrollar complejas estrategias políticas y discursivas que, en la aparente simplicidad con que se presentan, ocultan una hasta ahora indescifrable red de pactos secretos, relaciones espurias y diversos tipos de anormales y amorales arreglos interinstitucionales, como lo ha demostrado, entre otras tantas cosas, el denominado "escándalo de los sobornos en el Senado de la Nación".

Sabido es que durante la gestión menemista, y aún en el momento actual, la clase obrera y los sectores directamente perjudicados por la aplicación sistemática de "políticas de expropiación", sirvieron de soporte político-electoral del nuevo bloque social dominante dirigido por el menemismo y que dieron consenso explícito a la dirección neoliberal-conservadora, adoptada por el gobierno durante la década de los noventa. Sostuvieron pertinazmente con su opinión, con su desmovilización, con su retaceado apoyo a los tímidos intentos de oposición —generados por algunos grupos sindicales, movimientos sociales y pequeños partidos políticos minoritarios— la orientación política del gobierno peronista y, cada vez que fueron convocados, apoyaron con su voto la implantación de medidas específicas que redujeron brutalmente sus anteriores conquistas. Hace un tiempo,

Ignacio Lula, después de su última derrota electoral como candidato a la presidencia de Brasil, planteó tal contradicción bajo la forma de una interrogante. Parafraseando sus términos, podría presentarse del siguiente modo: ¿por qué razón, en el encuadre democrático actual, las víctimas pierden su propia memoria, olvidan su trayectoria, desestiman las luchas del pasado y apoyan políticamente o votan periódicamente por sus verdugos directos y más evidentes?

El tema es sumamente complejo, pero para comenzar a construir una respuesta es necesario definirlo dentro de un contexto más amplio. Hay que volver a analizar desde otra perspectiva, resaltando el papel que ha jugado la política desarrollada en un contexto democrático y la democracia misma en la instalación de esa contradicción entre intereses materiales específicos y directos y la conducta política de las clases populares. En esa redefinición habría que tomar distancia de dos visiones críticas tradicionales, que se implican mutuamente, aunque muchas veces han sido planteadas por separado: las que consideran a la democracia una práctica política institucional formal y excluyente de la verdadera participación de las clases populares en el poder político y el Estado y aquellas otras que, sin descartar lo anterior, enfatizan mucho más el efecto "ilusorio" de integración-participación de toda la sociedad en la toma de decisiones estratégicas que hacen al futuro de la Nación. Esta toma de distancia respecto a esas perspectivas, que tendrán que ser analizadas profundamente en otra oportunidad, debe servir, en cambio, para retomar y reforzar los interrogantes que se han planteado sobre el rol activo que juega la democracia en la modelación de esas conciencias, aunque los hipotéticos mecanismos a descubrir y los efectos sean diferentes. Puede reformularse del siguiente modo: ¿cómo actúa la política y el gobierno democrático para orientar conductas que atacan los propios intereses de las clases populares, apoyando a movimientos y partidos que los contradicen explícitamente?

Llevada a su límite, la política expropiadora diseñada por nuestro Estado y ejecutada por una gran variedad de actores diversos, genera en los sectores más desposeídos de la sociedad una grave situación de exclusión temporal que se está convirtiendo últimamente, al calor de los sucesivos planes de ajuste y reiteradas crisis económicas, en una grave situación de exclusión permanente en pleno proceso de expansión. La lógica del despojo amplía el campo de la pobreza, transforma una parte de la pobreza en indigencia y marginalidad y a la marginalidad indigente en exclusión. Por esa causa es probable que uno de los rasgos definitorios de la sociedad argentina del momento actual y fuente de una gran variedad de problemas sociales diversos, tenga plena relación con la construcción de situaciones de exclusión en las que se combinan, en forma diversa, la privación material y el despojo de su autonomía personal y de todo aquello que formaba parte de su poder simbólico. Por lo tanto, el despojo viene a ser respecto del modelo político-democrático, lo que la corrupción al modelo corporativo-estatal; el empobrecimiento y la exclusión al proceso de decadencia social y la desocupación; el endeudamiento, la concentración, extranjerización del capital, etcétera, al modelo de acumulación neoliberal.

La exclusión es, por tanto, el resultado de una producción social compleja en la cual intervienen el Estado, la dinámica del propio mercado y también el régimen político. Todos se hallan imbricados y mutuamente comprometidos en el agravamiento de la "cuestión social", aún en su forma más extrema, la exclusión social. Para hacer patente la enorme responsabilidad que tiene la producción política democrática en ese proceso, es decir, en la articulación que hoy observamos entre despojo material y despojo simbólico de los sectores populares, denominaremos a este nuevo tipo de democracias productoras de exclusión como "democracias excluyentes".

La democracia excluyente y la crisis de la política

El modo de hacer política que sustentó el proceso de consolidación del sistema democrático durante su último periodo de reconstrucción ha generado una enorme cantidad de contradicciones y para la mayoría de los analistas políticos se halla sumergido ahora en una grave crisis. Algunos lo han considerado como el resultado de un profundo desajuste, una manifestación extrema de la crisis que ha generado en la tradicional política "agregadora de demandas" la profunda transformación sociocultural que ha marcado la evolución de las sociedades latinoamericanas durante la década de los noventa.

Según esta concepción, los nuevos conflictos y requerimientos políticos que generan los grupos sociales de la actualidad no pueden ser recogidos, asumidos, ni resueltos por los mecanismos de mediación política que alimentaron la dinámica del sistema democrático a lo largo de toda su historia (Lechner, 1999; Garretón, 2000). Cuando así es concebida, o sea como disolución de vínculos tradicionales fundamentales entre sociedad, Estado y política, la denominada crisis política es descompuesta en dos grandes elementos. Se identifica, por un lado, con el objetivo último de la estrategia neoliberal: la construcción de un nuevo tipo de sociedad diseñada como un inmenso mercado, y dentro de ella, con la subordinación de la práctica política al saber económico y su restricción a la administración de las cosas y las instituciones.

En ese contexto, el Estado es despojado de casi todas las funciones que justifican su existencia y especialmente de su papel de intermediario entre sociedad y mercado para convertirse en vaso comunicante, en canal de transmisión de los valores y criterios mercantiles hacia la gestión de la cosa pública. La crisis de la política tradicional es, por lo tanto, una consecuencia de la pérdida de funciones, obligaciones, referentes sociales y permanentes desafíos coyunturales que el gobierno debió afrontar para garantizar el funcionamiento de un Estado nacional desarrollista-distribucionista, profunda y directamente involucrado no sólo con la marcha de la economía sino con la solución de la innumerable sucesión de conflictos generados por los enfrentamientos de intereses intersectoriales. La crisis de la política está vinculada con el avance del mercado sobre el Estado pero no es su consecuencia. Más bien a la inversa, los cambios de un orden mucho más general, provocados por lo que se ha denominado "crisis del mundo moderno"

especialmente en la política y la cultura, dentro y fuera del ámbito nacional, han agravado en extremo la crisis de la práctica política, de tal forma que la han convertido en una crisis de lo político, es decir, del lugar, del poder y de la función real que tiene la política actual en relación con los problemas, los conflictos y las necesidades de cambio que reclama la sociedad actual. Este proceso de mercantilización, privatización y consecuente despolitización de la política tradicional no sólo transforma a los políticos en falsos representantes ciudadanos sino en meros administradores de algunas cuestiones estatales indelegables, y con ello induce una profunda transformación de la democracia misma y de su propia razón de ser.

En medio de ese proceso se desarrolla otro de virtual extinción de los antiguos pactos de representación poniendo en crisis al núcleo central del sistema democrático. En el pasado, la representación política se construyó a partir de grados relativamente altos de articulación entre los partidos políticos y las identidades sociales colectivas, que a través de un complejo proceso de interacción realizaron el trabajo de lo que se ha denominado "agregación de demandas", un vasto sistema interactivo que transformó en símbolos, rituales, ideas y proyectos políticos las aspiraciones más o menos difusas que surgieron en su seno. Por esa causa, el pacto implícito de delegación de poder que contenía la representación electoral se hallaba pleno de contenido; no era el producto exclusivo de una campaña electoral, era el punto de llegada de una larga historia de mutua penetración entre los grupos y los partidos y, a la vez, el comienzo de una fase superior por la cual el trabajo institucional del "representante" permitía establecer, generalmente, condiciones favorables para un posible pacto futuro (Novaro, 1999; Hagopian, 2000).

En nuestras democracias actuales ese vínculo se ha transformado, desnaturalizado, desvanecido o, en los casos más extremos, ha sido sencillamente eliminado. La modificación radical que se ha producido en el mundo de los representables (heterogeneización de las estructuras sociales, disolución de las antiguas identidades de clase, desvanecimiento de antiguos actores sociales, cambios en el contenido y en la diversidad de las demandas, etcétera) ha modificado el sentido y especialmente la dirección de la representación, concebida como agregación de demandas producidas en el seno de la sociedad.

En la actualidad, este nuevo rasgo estructural de lo social, unido al desproporcionado aumento del espectáculo político generado por la expansión de los *massmedia*, ha dado lugar a una nueva modalidad de representación en la cual la relación entre representantes y representados se constituye recorriendo un camino inverso: el candidato a representante construye a través de la apelación "massmediática" su propio universo de representables a través del contenido de la oferta electoral. Pero la oferta no le da forma política a necesidades sentidas e identificadas en el ámbito de lo social sino todo lo contrario: construye tanto las necesidades sociales comunes de un universo de ciudadanos-televidentes-electores, totalmente desvinculados entre sí, como su transformación en problema político, a través de la propuesta de resolución. De ese modo el elegido

es, de un lado, el creador de una nueva especie de débil entidad colectiva, base de un subuniverso de representación diferenciado del resto; de otro lado, es el portador de esa representación en el ámbito propiamente político (Vommaro, 2001). Sin negar que este complejo conjunto de factores esté condicionando el contenido y la dinámica de la política en democracia, gravitando cada uno de ellos de un modo que será necesario investigar sistemáticamente, queremos resaltar que los aspectos más determinantes del cambio de lo político y de la política en el momento actual son diferentes y deben ser pensados desde otra perspectiva analítica.

El análisis del vaciamiento de las ideas, propuestas y estrategias políticas que ha difundido el periodismo especializado que se ha trabajado más sistemáticamente en un pequeño conjunto de trabajos académicos, debe considerarse rigurosamente válido si con ello se hace referencia a la política pública, es decir, al modo en que se entrecruzan discursos, imágenes, acciones y actores en ese escenario predominantemente "massmediático" que hoy convoca pasivamente a la mayor parte de la ciudadanía. Utilizando nuevas estrategias, sobresaturados de imágenes, vaciados de información sustantiva y reflexiones enriquecedoras, los mensajes políticos inscritos en el espacio público entremezclan, confunden y en definitiva escamotean precisamente todo aquello que resulta esencial e imprescindible para "comprender", para definir problemas, para identificar necesidades, para ubicar interlocutores, para apelar a instituciones, para construir organizaciones, para generar conductas y proyectar acciones. De ese modo, la política pública que sustenta la reproducción de las leyes del juego democrático ha sido despojada y el espacio público —espacio de intercambios, confrontaciones, luchas, elaboración de proyectos y definición de problemas en el pasado— está vacío, ya no tiene relevancia ni puede generar nuevos significados capaces de contrabalancear el efecto devastador que ha tenido el arrollador avance del espectáculo electoral telemático, las estrategias de *marketing* y el reemplazo de la opinión-participación militante, por los sondeos de opinión y la encuestología (Pasquini Durán, 2000).

Pero la crisis de la práctica política pública en democracia no obedece a una crisis de definición de la política misma como instrumento de elaboración de proyectos o, aún más, como elemento sustantivo de transformación de la realidad, tal como lo plantean Garretón y Lechner en los trabajos ya citados; más bien, la crisis es una imagen, el rasgo más sobresaliente, el modo más directamente perceptible en que se presenta un proceso oscuro, todavía ambiguo y contradictorio que ha sido difícil de desentrañar hasta el momento. La política no se empobrece, se enriquece cambiando de función y de contenido en la medida que responde a la existencia de un nuevo tipo de correlación de fuerzas en la sociedad argentina y a la necesidad de prevenir y neutralizar la enorme cantidad de conflictos potenciales que está generando, como veremos, la consolidación del tipo de democracia excluyente que hoy impera en el país.

En efecto, a la luz de la impresionante sucesión de acontecimientos acaecidos durante los dos últimos años, no es arriesgado afirmar que la decadencia de la

política pública, como parte de la decadencia general de la sociedad, se define por cuatro rasgos: el pragmatismo, la inmediatez, la eliminación de las propuestas y del debate político y la frivolidad del trabajo político electoral. Estos rasgos no forman parte, sin embargo, de una nueva estrategia de vaciamiento, sino de ocultamiento de los renovados contenidos de la política. Ocultamiento que toma la forma, o es presentada como pérdida, es decir, como desvanecimiento, cuando en realidad es todo lo contrario.

Si se analiza el trabajo político realizado por el muy reducido sector privilegiado de esta sociedad, agrupado alrededor de la nueva clase dominante, aparece un nuevo entramado de relaciones, anteriormente desconocido, entre nuevos protagonistas centrales de la política (fundaciones, consultoras, calificadoras financieras, organismos de control internacional, etcétera) y viejas instituciones tradicionales, especialmente modificadas para el desempeño de los nuevos roles que requiere la oportunidad (sindicatos, corporaciones, partidos políticos, etcétera). Todas ellas coordinadas o por lo menos fuertemente supervisadas por nuevos y viejos organismos internacionales (FMI, Banco Mundial, Grupo de los Siete, etcétera) preocupados en asegurar la capacidad de pago y la solvencia a corto plazo de los países fuertemente endeudados. Creciendo unos, autotransformándose otros y adaptándose la mayoría a la necesidad de cambiar la política junto con el cambio de la sociedad, del Estado y del contexto internacional, crearon un centro hegemónico de poder que por los muy importantes cambios producidos en el imaginario de la sociedad resulta hasta ahora inexpugnable, a pesar del estado de decadencia y crisis en que ha sumido a la mayoría del país.

Su fortaleza se deriva, valga la aparente paradoja, de su imagen de debilidad, de su crisis pública y de su incapacidad para generar alternativas viables a la interminable sucesión de políticas de reducción de bienes y conquistas populares que constituyen la esencia de las estrategias gubernamentales neoliberales. Como es sabido, esa estrategia del "ajuste" interminable ha generado un estado de descomposición y decadencia social, que afecta a la inmensa mayoría de la población y, por esa causa, debería entrar en natural contradicción con el contenido de las ofertas que deben atraer la voluntad de las mayorías electorales. Se presenta como debilidad e impotencia y se oculta detrás de las supuestas crisis de la política y del sistema político porque no halla un mejor modo de resolver favorablemente esa contradicción. Por esa razón, los representantes diluyen los compromisos implícitos en los pactos de representación y los partidos políticos buscan y se alimentan de la frivolidad de la política, esperando que al final del camino se consolide la ritualización vacía del proceso electoral y se profundice la desafección hacia la política que ya siente fuertemente una buena parte de la población. La política pública sustantiva se diluye y es reemplazada por un conjunto de procedimientos ya consolidados, minuciosamente ejecutados y religiosamente respetados que son presentados como si constituyeran los rasgos visibles de una crisis política generalizada que no aparenta tener a la vista principio ni forma alguna de resolución.

Vista desde esa perspectiva, la crisis de representación es un hecho real e indiscutible, pero esa crisis no conduce necesariamente hacia la crisis de la política ni del sistema político. Por el contrario, la crisis de representación se constituye en un punto de partida y en un componente central de las nuevas formas de hacer política de contenido antipopular, en medio de un sistema democrático que se funda en el respeto de la voluntad popular expresada en periódicas consultas electorales. Se relaciona, entonces, con la drástica ruptura que han hecho los dos grandes partidos tradicionales con su propio pasado, en el cual representaban dos fuertes subculturas defensoras del progreso y del bienestar popular y con la disolución de los grandes liderazgos carismáticos que les permitieron ocupar el centro de la escena política durante la mayor parte del siglo anterior. Se modifica, por esa causa, la vieja naturaleza de la representación: el pacto semidelegativo que caracterizó el desarrollo de las democracias plebiscitarias es reemplazado por una nueva especie de contrato vacío, donde predomina el componente delegativo; al mismo tiempo, éste se combina con un nuevo sistema de comunicación de imágenes y de ideas fragmentadas y fugaces en una especie de teatralización massmediática del debate y la propaganda política (Novaro, 1995). La profunda despolitización de esta confrontación permanente genera un proceso de selección natural que premia mejor a los que se transforman en expertos operadores, especializados en la manipulación de los procedimientos electorales intra y extrapartidarios que a aquellos que tratan de evitar los conciliábulos y pactos secretos y la privatización de las decisiones políticas significativas.

Esa crisis de representación tanto de los políticos como de los partidos ha erosionado rápidamente, como veremos, los grandes márgenes de legitimidad y consenso popular con que contaba el sistema de partidos al comienzo del proceso de transición democrática (Adrogué y Armesto, 2001). Para los ciudadanos que, de distinto modo e intensidad, han dejado de creer en el valor positivo de la política, el proceso electoral tiene otro fin que lo aleja de ella pero lo justifica en sí mismo: en vez de ser una oportunidad de confrontar y seleccionar proyectos, es un imprescindible trámite para renovar los elencos dirigentes y asegurar la continuidad de las instituciones gubernamentales-estatales de la democracia. De allí que la política pública destinada a vincular electores mandantes con delegados administradores de instituciones estatales, dentro de un pacto que en vez de unificar "descompromete" a ambos, esté pareciendo además de inútil e irrelevante absolutamente autorreferente y, dentro de ese esquema, también corrupta y malversadora de bienes públicos. Ese es el contenido del denominado "teorema de la doble imposibilidad", enunciado gran cantidad de veces por el ex vicepresidente Carlos Álvarez, uno de los críticos más firmes pero más inconsecuentes del estado de degradación que corroe el funcionamiento actual del sistema político electoral:

los mercados –dice– y sus usinas intelectuales, llámense FIEL o CEMA, viven la política como ruido. Creen que si pudiera terminarse la política sería lo más beneficioso, toman la política en clave de populismo o distribucionismo

anacrónico. Del otro lado está la sociedad para la cual política es sinónimo de delito (Álvarez, 2000).

No obstante, en ese contexto de absoluto desprestigio, creciente desconfianza y casi nula participación en política por parte de los ciudadanos-electores, la crisis de representación todavía no ha comenzado a transformar significativamente el descreimiento en "desafección", fenómeno que, como veremos más adelante, es diferente al anterior. A pesar de su vacío y de su aparente y muy promocionada ineficacia, la política pública sigue siendo un importante campo de atracción: "en los últimos cinco años, poco más de un tercio de los argentinos se ha manifestado muy, o bastante, interesado por la política y casi la mitad sostiene que sigue con frecuencia las noticias políticas a través de los medios masivos de comunicación" (Adrogué y Armesto, 2001:626). En el trabajo anterior ya citado verificamos, igualmente, la existencia de una situación relativamente similar referida a las expectativas y a la conducta de los electores frente a la competencia por la renovación presidencial de finales del año 1999.

En medio de esta fuerte tensión que puede estar dándose entre la aparente esterilidad e improductividad de la política de los políticos –desarrollada en el marco estrecho del actual sistema político– y el mantenimiento de un cierto grado de conciencia histórica que conduce a reconocer el valor potencialmente renovador y también purificador de la política –entendida como práctica social transformadora– emerge un dato aparentemente contradictorio con todo lo anterior: la densidad, fortaleza y centralidad que conservan los partidos políticos tradicionales y el propio sistema de partidos bipolar. A medida que se ensancha la brecha entre representantes y representados, y se agudiza la crisis del sistema representativo en su conjunto, la aceptación, o por lo menos la no-impugnación por parte de una fracción nada despreciable de la sociedad, le continúa otorgando el protagonismo principal, tanto en la organización de los periódicos procesos electorales, como en la selección, propuesta y consagración de los elencos gubernamentales. Por razones confusas que es necesario investigar, el alto grado de descrédito que aparentemente los viene corroyendo no les impide ocupar y controlar en forma excluyente y casi permanente el centro de la escena política en que se hallan instalados, ni seguir aportando una cuota nada despreciable de legitimidad y consenso a las instituciones y elencos que surgen de su decisiva participación en las periódicas competencias electorales (Jozami, 2000; Acuña, 1995; Palermo, 1999).

La corporativización y las crisis de legitimidad del sistema político

La ideología neoliberal se ha instalado en medio de esta contradicción entre lo político y la política o, en un nivel más específico, entre el sistema político y los partidos políticos, tratando de abrir una nueva perspectiva institucional que se deriva de su concepción administrativista de la función pública y empalma, en más de un aspecto, con los análisis de la crisis que hemos estado repasando en la parte anterior.

En efecto, el neoliberalismo en su variante más fundamentalista, es la matriz socio cultural de la sociedad de mercado que, como se ha dicho reiteradamente, tiene un punto de partida que es, a la vez, uno de sus objetivos fundamentales: llevar hasta su punto más extremo el proceso de autoextinción de la política mediante el desgaste y la descalificación del valor de la práctica política hegemónica por los partidos políticos en el seno de las actuales democracias realmente existentes. Ese no es, obviamente, su único propósito, pero ocupa un lugar destacado en su búsqueda de hegemonía y trata de ser implementado poniendo en movimiento un complejo operativo destinado a consolidar el proceso de redefinición de la subjetividad social iniciado en la década de los noventa. Se lleva adelante mediante una compleja red de procedimientos interconectados que en su gran mayoría se presentan a la sociedad, y son percibidos por ella, como componentes de "la crisis de la política".

En la investigación sobre las formas en que fue realizada la campaña política de la última contienda electoral, logramos identificar algunos de los rasgos empíricos del modo en que se ha "construido" esa crisis, y de la función que ella cumple en la armonización del funcionamiento político institucional que caracteriza nuestra democracia actual. Agrupamos esos fenómenos alrededor de dos grandes procesos fundamentales: la corporativización del sistema político y la desafección política de la mayoría de la sociedad. Aunque los tratamos como partes mutuamente implicadas de un mismo conjunto, las relaciones que establecimos entre ellos nos llevaron a la conclusión de que nos hallábamos frente a un nuevo tipo de democracia que denominamos "democracia cómplice", para resaltar aquello que constituía, a nuestro juicio, su característica central: justificar, a través de instrumentos y procedimientos simbólicos, el proceso de decadencia social que acompañaba su consolidación durante el denominado periodo de transición. Posteriormente comprobamos que la "justificación simbólica" era muy importante pero constituía sólo un fragmento menor de ese otro crucial proceso de "despojo simbólico" que hemos descrito en el inciso anterior.

Veamos, primero, algunas de las características del proceso de "corporativización" de las prácticas y de los actores de la política democrática. Transformados en protagonistas dominantes, casi exclusivos, de procesos electorales de base massmediática, en los que la sociedad se aviene a seleccionar candidatos sin exigir ni ejercitar la discusión y el desarrollo de proyectos políticos diferentes, los principales protagonistas de esta nueva situación comienzan a desarrollar un nuevo sistema de reglas políticas destinado, primordialmente, a la preservación de los mecanismos ya establecidos de la competencia electoral y al desarrollo de nuevos criterios implícitos de convivencia institucional que van adquiriendo mayor valor por sí mismos que por el modo en que facilitan el cumplimiento de la función social que tienen asignada. Así comienzan a generar un conjunto de intereses específicos de la profesión electoral institucional que se vuelve mucho más fuerte y determinante que los intereses que deberían ligar a cada uno de ellos con sus respectivos representados, dando lugar a un previsible proceso de

autonomización de necesidades y objetivos que alimenta, a su vez, la formación de un nuevo tipo de espíritu corporativo.

El espíritu corporativo produce, por tanto, una insalvable contradicción: aquellos que fueron elegidos para pensar y actuar en la representación de intereses diversos de la sociedad y encontrar en las instituciones gubernamentales su modo de enfrentamiento y conciliación se transforman en todo lo contrario. Constituyen un cuerpo faccioso y autorreferente que subordina toda forma de representación de intereses diversificados de la sociedad a la necesidad compartida por la mayoría de sus miembros de asegurar la supervivencia y reproducción "del cuerpo" político-electoral-institucional.

Si se aproxima un poco la mirada puede descubrirse, además, que durante su desarrollo, el proceso de corporativización del elenco político fue creando una amplia red de relaciones diversas y entrecruzadas que ha dado lugar a la creación de una especie de megacorporación, un amplio complejo corporativo compuesto por varias instancias.

La instancia estrictamente política es la más visible porque en ella se reúnen los elencos, las conductas y los procedimientos que permiten la reproducción de la "corporación político partidaria" en esa nueva situación de virtual extinción de los pactos representativos. La ruptura del pacto se produce en el mismo momento en que se acentúa el control monopólico de su aparato partidario sobre los procedimientos electorales y hace posibles esos falsos compromisos de representación, utilizados como vías de acceso casi exclusivo hacia el poder gubernamental. Para amortiguar esa contradicción, los partidos se vuelven fantasmales, se desvinculan de la gente, no recogen ni politizan las demandas, evitan los controles sobre su gestión y abandonan toda forma de orientación ideológica y de dirección política sobre sus elencos de representantes y funcionarios.

La autoneutralización del Partido Radical, gestionada cotidianamente por su presidente el Dr. Raúl Alfonsín, para "no entorpecer" una gestión gubernamental que va contra todos sus postulados y promesas electorales es tan ostentosa y permanente que de ser, como se suponía al principio, una disposición táctica para congelar un problema irresuelto entre Partido y Gobierno, ha pasado a formar parte de un proceso de "vaciamiento" político ideológico, similar al que sufrió el Justicialismo una década atrás y del cual no ha podido, por otra parte, recuperarse nunca más. Por esa razón, las conductas de moral dudosa y los "manejos" espurios que siempre formaron parte de la dinámica global de los partidos políticos se quedan sin contrapeso, se vuelven ahora totalmente dominantes y adquieren dimensiones totalmente desproporcionadas. Surge, de ese modo, un nuevo perfil del partido político caracterizado, entre otros rasgos, por el aislamiento social, las conductas autopreservativas, la eliminación de las ideas y del debate político, la fulminante expansión de las concepciones "posibilistas", el desplazamiento de la ética política, la imposición de la ingeniería electoral, la organización massmediática, la manipulación de las instituciones, las formas perversas de vinculación con la clientela electoral en las luchas internas, el internismo y las formas degradadas y vacías de reclutamiento y promoción de los nuevos tipos de militantes.

Puede incluir elementos aún más perversos como la corrupción individual, colectiva, etcétera, pero no los requiere inevitablemente: la corporación partidaria puede mantener un correcto código ético pero no por ello generar esa diferencia de intereses que niega su origen y desnaturaliza su función social. El actual presidente del Partido Radical que es, por la generación a la que pertenece y por su actuación protagónica en los últimos cuarenta años, un testigo privilegiado de este proceso de mutación de los partidos políticos lo dice explícitamente:

Esta puja entre política y mercado es fuerte. Para ganarla se necesita de la convicción que dan los ideales y los partidos han perdido esos ideales, han perdido todo. Las marejadas ultraliberales han producido un efecto catastrófico dentro de las fuerzas políticas, mercantilizándolas. Para nosotros es especialmente desastroso porque el radicalismo nació luchando contra las oligarquías económicas y hoy ha conformado una oligarquía política: los que se acercan a la política ya lo hacen pensando en la rentabilidad..., no existe el fervor militante. No hay una pegatina que no se tenga que pagar, no hay una pintada que no se tenga que pagar. No hay mística, ni militancia (Alfonsín, 2001).

Asociada con todo esto, se puede identificar también una instancia político-institucional que se relaciona con la gestión de las medidas tomadas en el gobierno y el Estado. Ha sido constituida por una densa trama secreta, o semisecreta, de acuerdos entre funcionarios, jueces, legisladores, gobernantes, políticos, etcétera, destinada a tomar cierto tipo de iniciativas legislativas, a frenar otras cuando lesionan intereses defendidos por *lobbyistas* profesionales, para aprobar iniciativas "impopulares" del Poder Ejecutivo o promocionar toda clase de decisiones gubernamentales. Un sistema de acuerdos espurios, que comenzó a ventilarse públicamente el día en que uno de sus más conspicuos representantes decidió denunciar la existencia de sobornos a un grupo de legisladores para obtener la aprobación de una onerosa modificación a la ley de trabajo vigente en el Senado de la Nación. Un estudio detallado de esos acontecimientos confirmaría con datos específicos la existencia de este *supra* sistema que recorre horizontalmente a todos los cuerpos partidarios y gubernamentales. Podría mostrar también cómo a través de su evolución la población percibe, por un lado, su existencia, y descrea por el otro, que su poder y sus manejos arbitrarios puedan ser efectivamente modificados.

La evidencia de la corrupción genera impotencia; y su transformación en un intrigante espectáculo mediático crea indiferencia y desafección. Esos mismos datos dejarían entrever, igualmente, las características y la enorme envergadura del poder político y social que ha ido acumulando la corporación, y la forma en que lo ha usado para volverse prácticamente impenetrable a las críticas que le llegaron desde todos los sectores, y especialmente para seguir manteniendo en secreto los pactos que dieron lugar a los "arreglos" que hicieron posible la aprobación de esa ley, requerida por el Poder Ejecutivo. Mostraría también la rapidez de reflejos que tiene el cuerpo para cerrarse sobre sí mismo y generar pactos de

silencio entre la mayoría de sus miembros; sobre sus procedimientos secretos destinados a perpetuar su impunidad o, en el peor de los casos, dilatar y tergiversar enjuiciamientos y eludir sanciones políticas a quienes han tenido comportamientos fuertemente asociados con el delito y la corrupción. Dejaría entrever, en suma, que la complejísima red de complicidades que la sustenta ha generado una especie de malla de seguridad que le permite sobrevivir cómodamente sustrayendo del debate político sustantivo su propio cuestionamiento.

Las redes anteriores parecen hallar su último sustento, justificación y explicación en la aparición del nuevo conglomerado político, institucional y empresarial que da forma a la tercera instancia y define, a su vez, la naturaleza de un nuevo tipo de Estado. La degradación de los procedimientos políticos y gubernamentales no sólo se relaciona con la construcción de una nueva forma de poder político institucional; también se ha convertido en pieza fundamental de una nueva forma de colusión entre la gestión de los negocios privados y la administración de los intereses públicos, todo lo cual ha dado lugar a la constitución de un nuevo tipo de clase dominante y a la recreación de un nuevo bloque de poder político estatal. Dentro de este bloque es muy dificultoso escindir, como se hacía en el pasado, entre el núcleo compuesto por la comunidad propiamente empresarial, dedicada y que acumula excedentes sociales a través de sus negocios privados, y aquél otro que desde la administración de instituciones estratégicas del Estado los promueve y facilita, legal e ilegalmente. Aunque sabemos que la nueva clase dominante es dirigida por un núcleo sumamente poderoso enclavado en los negocios financieros, resulta muy difícil dilucidar en qué circunstancias el descomunal crecimiento de las ganancias obtenidas durante la última década por los grandes bancos y las grandes empresas privatizadas ha sido generado por la realización de negocios más o menos normales en el mercado, o es el producto de una serie de "arreglos" establecidos entre ellos y la corporación político-gubernamental.

En esos "arreglos" parece existir un constante juego de ida y vuelta donde se entremezclan funcionarios, iniciativas, estrategias, intereses y hasta las propias instituciones públicas y privadas. Todos parecen obtener sus objetivos, el crecimiento de los negocios, la acumulación súbita de capital, el enriquecimiento injustificable, etcétera, por medio del manejo ilícito de los poderes estatales. Pero aunque están convergiendo en la formación de un mismo bloque, tienen distinto origen, se manejan con diferentes procedimientos y tienen distinta función: unos provienen del campo empresarial y son especialistas en la acumulación de capital propiamente dicha y otros provienen del campo político y son especialistas en la acumulación de capital político electoral. Entre ambos han constituido una especie de gigantesca asociación ilícita que controla y administra un nuevo tipo de Estado, plagado de instituciones que tienen como misión fundamental favorecer el desarrollo de ganancias privadas de carácter extraordinario o casi monopólicas (Notchef, 2001). Ganancias que por su propia naturaleza van en oposición al interés general de la sociedad pero que, a la vez, necesitan ser legitimadas por ella misma a través del consenso, por lo menos pasivo, que le otorga su participación en procesos periódicos electorales, organizados por los grandes partidos

tradicionales. Cada cual pone lo suyo y en función de ello se define el reparto de los réditos obtenidos. Las evidencias aportadas por las últimas investigaciones muestran un estado de colusión tan complejo que vuelve casi imposible e inútil el intento de diferenciación. Son beneficios económicos, políticos y sociales que se apropia un sector muy reducido de la sociedad por medio de un nuevo tipo de ejercicio entremezclado de las formas de poder, de un nuevo modo de subordinar la función del Estado a sus estrategias de acumulación.

De más está indicar que de allí se extrae la substancia que alimenta la serie también interminable de mecanismos individuales y colectivos de corrupción ocasional, periódica o sistemática. Todas las formas y todos los niveles de corrupción política, empresarial y estatal están presentes en ese bloque, pero no es la corrupción sino la "colusión" lo que define tanto al bloque social dominante y a la forma del Estado, como al carácter "neoprebendario" que adquiere el modelo de acumulación de capital. Este Estado es además el artífice, el conductor, el principal protagonista del proceso de redistribución regresiva del ingreso, del empobrecimiento y de la exclusión social, que caracterizamos anteriormente, a través de un perverso mecanismo: su autodestrucción. El sistema político en que se apoya y le aporta las cuotas mínimas imprescindibles de legitimidad es, a su vez, el responsable principal del vaciamiento ideológico, del "despojo" en el nivel simbólico, o sea de la producción política que intenta profundizar y expandir el proceso de "desafección" de los sectores populares, hasta sumirlo a través de la sensación de impotencia en un estado casi permanente de inanición, en espectador pasivo y desvaído, incapaz de reaccionar.

En efecto, como hemos visto más arriba y desarrollado más extensamente en el trabajo ya citado, la contracara del proceso de corporativización es la desafección, un fenómeno señalado por una gran cantidad de autores (Paramio, 1993) pero escasamente analizado todavía. Hace referencia a un proceso que se desarrolla en forma fragmentaria y ambigua y afecta las conductas, actitudes y valoraciones de los ciudadanos comunes respecto al valor y la eficacia de la política concebida como práctica de transformación de lo social. Se desarrolla en tres etapas: la desafiliación, el desinterés y la desafección propiamente dicha.

La desafiliación parece ser uno de los primeros signos distintivos de las nuevas democracias, supone la disolución de los lazos de fidelidad política tradicional de una parte de la sociedad con un tipo determinado de agrupación político-electoral; el antiguo "partidario" rompe las relaciones de pertenencia y elabora una nueva relación de referencia que significa mayor independencia y el desarrollo de un espíritu crítico para evaluar su desempeño específico en cada circunstancia particular.

Cuando la independencia y la aplicación de juicio crítico producen reiteradas evaluaciones negativas se puede dar un desplazamiento de la preferencia electoral hacia otras agrupaciones, pero ese desplazamiento no va acompañado de nuevas "re-afiliaciones" sino de una creciente convicción de que el fracaso político del partido de referencia es parte del fracaso de todo el sistema. En ese caso se produce una especie de cambio de grado: la desafiliación se transforma en

desinterés en el momento en que el ciudadano comienza a considerar la oferta electoral como irrelevante, como una especie de juego de simulación que en unos casos omite dar respuesta, en otros tergiversa los términos y en el resto oculta deliberadamente los problemas que le interesan a la gente.

Lo que une a ambos movimientos, la corporativización del elenco político y la tendencia a la desafección de la mayoría de los ciudadanos, es otro proceso igualmente significativo: la compleja producción de nuevos significados, generados por la actuación política mediante la elaboración de un nuevo tipo de discurso consagratorio y la eliminación de todo tipo de discurso anticipatorio; lo cual rompe con las experiencias del pasado y abre el campo a las nuevas actividades del antiguo dirigente, representante convertido ahora en operador corporativo.

En efecto, aunque se presentan y son vistos como parte de un frívolo elenco especializado en hacer atractivo el reiterado espectáculo electoral vacío de contenido político de esta democracia, los candidatos, los representantes y los gobernantes, convenientemente asistidos por un verdadero ejército de técnicos, asesores y especialistas extraídos del sector empresarial, han demostrado poseer una enorme capacidad para remodelar la subjetividad de un enorme sector multclasista de la sociedad y generar una compleja ideología de aceptación resignada a la decadencia y el despojo que ha generado, a su vez, un consenso pasivo pero consistente respecto de la consolidación de la democracia desigual y excluyente. Este complejo operativo cotidiano se apoya en una complicada articulación de actores, acciones, representaciones y discursos guiados por una casi exclusiva lógica de convencimiento y subordinación: un tipo de chantaje político-cultural, de fuertes consecuencias psicológicas, que no sólo se halla dirigido a la aceptación del despojo sino que se convierte en un despojo en sí mismo.

Visto con esa perspectiva, el sistema político no parece estar en crisis porque haya perdido una naturaleza que podría llegar a recuperar, sino porque ha sufrido una profunda mutación en la cual la producción escenificada y permanente de su crisis se enarbola como un elemento fundamental de su reproducción y del cumplimiento de una de sus funciones fundamentales: la generación de "desafección". En vez de convertirse en el núcleo disparador de la restauración de los derechos sociales severamente conculcados durante la dictadura militar, los nuevos representantes del poder popular democrático, más allá de sus intenciones, operaron en sentido contrario, diseñando un nuevo tipo de régimen político-democrático fuertemente asociado a la implantación, consolidación y reproducción del proyecto neoliberal que articuló en un solo proceso declinación económica, endeudamiento externo, decadencia social y despojo material con crisis, subordinación y despojo de la política en el marco institucional de la democracia.

Por hallarnos inmersos en ese proceso desde hace mucho tiempo, es posible que la profundización actual de la crisis económica y política se haya transformado también en una crisis ideológico-cultural: lo que comenzó con desafección de los partidos y continuó después como desinterés respecto a las políticas "inooperantes", surgidas desde dentro del sistema político, se está transformando en algo mucho más riesgoso, de imprevisibles consecuencias: la desafección respecto a

"lo político", es decir, a la política misma entendida como instrumento de modificación de la realidad social.

Por ello, no es demasiado arriesgado afirmar que eso que observamos cotidianamente y continuamos denominando actividad política sea en realidad la expresión de todo lo contrario, la negación de la política misma en democracia, signada por el desarrollo de una sofisticada estratagema que involucra una multiplicidad de acciones, actores y discursos diferentes, destinados todos a garantizar que la disolución del pacto delegativo no se retroalimente mutuamente con la agudización de la decadencia y genere nuevos proyectos, iniciativas, identidades y actores.

A diferencia de lo que podríamos haber observado tiempo atrás, la profundización del proceso de decadencia, unida a lo que hemos visto como crisis de funcionamiento de la corporación, expande la situación de "desafección" a sectores cada vez más amplios de la sociedad; a la vez, sin embargo, abre un nuevo campo de tensión en el cual el desprestigio de las políticas neoliberales, el opacamiento de su discurso y la necesidad de volver a lo público y colectivo para satisfacer necesidades urgentes que se hallan totalmente excluidas de las preocupaciones empresarias en el mercado, muestra el inicio de algunas nuevas formas de acciones colectivas tendientes a generar nuevos tipos de pactos delegativos y de ese modo comenzar a neutralizar o a relativizar su contenido. Se pueden ver al respecto los documentos críticos elaborados por un espectro cada vez más amplio de organizaciones sociales, confesionales, gremiales, empresariales y políticas.

Los medios utilizados para generar esa crisis y esa sensación de extinción de la política no son, por tanto, una anomalía; no sorprenden por haber sido la consecuencia no buscada de un funcionamiento interinstitucional naturalmente imperfecto que ahora toma rasgos perversos e irracionales por efecto de la agudización de la decadencia. Es otra cosa, es una nueva modalidad creada por la corporación en todos sus niveles para generar un nuevo tipo de consenso. Un consenso "neutralizante" que no brinda adhesión por acuerdo explícito o implícito con la realidad y los discursos existentes sino por resignación, por hastío, por aceptación de que en la larga batalla por la preeminencia social sostenida durante largas décadas, los sectores populares empujados hacia el empobrecimiento y la marginación ya no tienen capacidad alguna para enfrentar con posibilidades de éxito a los poderes constituidos en todos los niveles de la vida social. A la exitosa prédica sobre el crecimiento incontenible de los recursos y el poder controlado por los poderosos en el nuevo contexto de la globalización se suma también "el chantaje" empresarial-gubernamental; una muy exitosa herramienta de apelación y de extorsión que analizaremos más adelante, y que ha brindado muy buenos resultados cuando hubo que explicar las inevitables causas "externas" de la expropiación y el despojo.

De donde podemos afirmar que la política no está vacía ni está en crisis, ha sufrido una mutación, ha cambiado de función y contenido: en lugar de potenciar y proyectar la lucha social, jerarquizándola, busca inhibirla produciendo impotencia, resignación, desaliento y la nueva creencia de que la

democracia sólo sirve para seleccionar elencos administrativos que no tienen la obligación de respetar pacto representativo alguno. Gobernantes que utilizan su escasa iniciativa política para mantener calmos a los inversores financieros, para satisfacer las exigencias de sus instituciones representativas y para asegurar la consecución de un orden donde la lógica de los mercados marca las relaciones de fuerza que han hecho posible, de un lado, el despojo de la mayoría y, del otro, la inconcebible concentración de la propiedad, el capital, los ingresos y el poder en un sector cada vez más minoritario y retrógrado de la sociedad.

La eliminación del debate público y la elaboración privada y semisecreta de la política

Todo lo anterior se basa, como hemos dicho, en una radical transformación de las estrategias de los partidos políticos en la disputa electoral y de los elencos gubernamentales en la instancia político-institucional. Lo que conocemos como frivolidad del trabajo político es parte de un nuevo proceso que tiene dos grandes componentes: de un lado es tributario de la privatización del trabajo político y, del otro, resultado de una nueva estrategia de ocultamiento del contenido de la política que toma la forma, o que es presentado, como pérdida, es decir, como vaciamiento. En efecto, la política no dejó de ocupar ni por un instante su tradicional rol estratégico en la fijación de metas y contenidos. Pero esa política creadora, aunque retrógrada, se convirtió en práctica de un solo sector de la sociedad, se elaboró en secreto y fue, además, privatizada. Como constituye el fundamento de la expropiación y el despojo es, también, inconfesable.

Ello explica en última instancia la exacerbación del vaciamiento ideológico y de la representación mediática que caracterizó a la última campaña electoral. Dentro de ese contexto totalmente despolitizado ¿qué proyecto propuso La Alianza? Y, en función de ello, ¿qué significado puede atribuírsele al voto de la mayoría que le permitió obtener un triunfo tan significativo? Como se ha afirmado reiteradamente, la votación adversa al Peronismo, que terminó con una década de hegemonía del proyecto menemista, traía un doble mensaje: recuperación de la ética política mediante la reforma moral de la gestión gubernamental y freno al proceso de estancamiento económico-decadencia social que, aunque parecía haberse vuelto endémico pero manejable, estaba agravándose peligrosamente por los efectos directos e indirectos que generaba el mantenimiento de la convertibilidad monetaria en el nuevo contexto regional dominado por los efectos de la última devaluación brasileña. A pesar de expresar una difusa aspiración al cambio, lo opuesto no parecía complejo ni irrealizable: modificar la tendencia al estancamiento y frenar el proceso de expropiación pero sin cambiar ninguno de los grandes pilares del modelo existente.

Por las presiones ejercidas desde el estancamiento financiero nacional e internacional, esas iniciales y débiles convicciones se transformaron, súbita e inesperadamente, en una agresiva ofensiva antipopular destinada a extraer recursos de esos sectores para arrojar un poco de agua en el desierto, es decir, para reducir

en parte el importante déficit fiscal heredado del gobierno anterior. Pero, como ya ha sido suficientemente demostrado, el déficit no era un problema de coyuntura ni la consecuencia principal de administraciones dispendiosas; una vez más expresaba las consecuencias generadas por un conjunto de problemas estructurales de la economía que al no haber sido resueltos en el marco de las políticas de desregulación, privatización y reducción del Estado llevadas a cabo durante el periodo presidencial anterior, se habían agravado sensiblemente.

En ese nuevo contexto, el modelo neoliberal heredado estaba siendo aceptado por la mayoría de los políticos de la Alianza gobernante, porque a pesar de ser injusto socialmente se había mostrado razonablemente exitoso en el plano económico. Poco tiempo después, la agudización del estancamiento económico combinada con el agravamiento de la cuestión social ponían en evidencia que había llegado a su agotamiento; se convertía en un modelo aún más injusto pero, además, inviable. "La estrategia adoptada por la Argentina entre la hiperinflación de Alfonsín y la convertibilidad de Menem ha hecho implosión", afirmaba en ese momento un periodista especializado (Nudler, 2000).

En claro contraste con lo que había venido ocurriendo durante la década de los noventas, en situaciones "de ajuste" similares, el paquete de nuevas medidas expropiadoras con que se presentó ante la sociedad el gobierno de la Alianza produjo un efecto sensiblemente diferente. En ese nuevo contexto, la profundización de las políticas neoliberales del ministro Machinea, especialmente la elevación de impuestos y la reducción forzada de salarios estatales, no sólo generó frustración y desconcierto entre quienes aplicaron esas políticas con esperanza de que produjera un cambio, sino que marcó el comienzo y la rápida generalización de una nueva sensación: el país estaba preso en un círculo vicioso irresoluble, agravado ahora por la inesperada insistencia del nuevo gobierno en continuar aplicando viejas fórmulas de ajuste que ya parecían definitivamente agotadas. Una inconsistencia aparentemente inexplicable de la política pública aparecía nuevamente condicionada por políticas gestadas y pactadas en secreto con los organismos internacionales ante la necesidad de afrontar, también en secreto, el cúmulo de nuevos problemas agregados por la aceleración del proceso de declinación económica, decadencia social y descomposición institucional.

En efecto, tal como lo venían señalando en forma aislada algunos analistas económicos, aunque negado sistemáticamente por la clase política, la recuperación de la actividad económica —semiparalizada por la prolongada crisis que, estando latente, desató la devaluación de la moneda brasileña— se había vuelto definitivamente incompatible con el mantenimiento de la convertibilidad monetaria, con la magnitud actual del endeudamiento, con el irrefrenable deterioro del mercado interno y con el incesante agravamiento de la nueva "cuestión social de la Argentina" asociada al crecimiento de la delincuencia y a la amenaza latente de estallido social.

Como muestra de la máxima impotencia en que lo sumerge la adopción de esa estrategia, a medida que los cuatro grandes problemas se van volviendo incommensurables e inmanejables, el Gobierno se refugia en la realización de una serie

de operaciones de ingeniería financiera destinadas solamente a impedir el agravamiento de la situación heredada. Mientras tanto, apuesta a que el mero transcurso del tiempo vaya generando un "milagro del mercado", una especie de reactivación económica que aún en el caso de producirse sería tan endeble y circunstancial como la precaria sensación de alivio asociada a ella.

En ese contexto, los discursos elusivos, las referencias fragmentarias, la imposición de temas no trascendentes y aún el propio ocultamiento pasaron a formar parte de una vasta conspiración de silencio respecto de las causas profundas y de los efectos ya permanentes de la perversa retroalimentación que desde hace un largo tiempo se ha venido estableciendo: el déficit de la balanza de pagos externa, la política monetaria, el achicamiento del mercado interno, el estancamiento económico y el crecimiento exponencial del endeudamiento externo.

La engañosa unanimidad respecto al mantenimiento de la convertibilidad que recorrió la campaña presidencial comenzó a mostrar sus núcleos conflictivos cuando el ministro Machina le dio *status* político al denunciar el acoso que esa firme estrategia gubernamental sufría desde dos flancos opuestos: la propuesta de devaluación y su contraria, la propuesta de dolarización. En realidad el problema de la política monetaria comenzaba a ingresar en la escena pública porque estaba expresando el nuevo tipo de enfrentamiento que se daba entre fracciones diferentes del gran capital. Pero también en este punto comenzó a imperar la lógica de la privatización-secretización de la política, pues el creciente conflicto social alrededor de los distintos intereses empresariales, que se enhebran con el cambio de la política monetaria y sus consecuencias, no alcanza a ocupar ni siquiera por un instante el centro del debate político ni el cruzamiento visible de las razones y consecuencias de las estrategias que estaban en juego (Verbitzky, 2001).

El problema era y sigue siendo crucial, pero la cerrada negativa de la clase política a hacerse cargo de la cuestión deja como única alternativa el actual discurso semivacío y elusivo del ministro Cavallo, así como también su superficial e ineficaz política de aumento de la competitividad dirigida a algunos sectores productivos, mediante la disminución de impuestos combinada con rebaja de costos salariales. En lugar del diagnóstico, la reflexión y el enfrentamiento de visiones y propuestas, se lanza esporádicamente el discurso apabullante y catastrofista justificador de la inanición y la impotencia. "Lo que hay o el caos..., si salimos de la convertibilidad caemos en cesación de pagos", dice uno de los asesores principales del nuevo ministro de Economía (Liendo, 2001).

Lo mismo puede afirmarse de la relación entre "convertibilidad" y "endeudamiento". Tal como ha sido reiteradamente señalado, el proceso de sobrevaluación creciente de nuestra moneda respecto al dólar, que ha generado el mantenimiento de esta artificial paridad cambiaria, viene provocando efectos devastadores sobre la denominada "economía real". Esto se expresa, entre otras cosas, a través de grandes restricciones en el nivel de exportaciones, de la caída de la producción interna, del aumento de los niveles de desocupación, del déficit crónico de la balanza de pagos externa y de los ingresos fiscales.

Como el Estado no dispone de los recursos fiscales, ni del volumen de moneda fuerte que requiere el cumplimiento de las obligaciones de la deuda externa, hace muchos años que viene cubriendo esos déficit con la adquisición de nuevos créditos. Esta estrategia le permitió cumplir puntualmente con las obligaciones externas y mantener al país dentro del mismo esquema económico pero a un muy alto costo: la producción de un círculo vicioso que primero transformó la deuda en endeudamiento y ahora, frente a la finalización de los flujos financieros que hicieron eso posible, una nueva y explosiva situación en la que se combinan y retroalimentan perversamente la prolongada recesión de la economía con una permanente amenaza de "cesación de pagos" (Basualdo, 2000; Schor y Lozano, 2001).

Por ello, el endeudamiento externo, la política monetaria y la recesión económica deben atacarse al unisono dentro de un modelo económico que pretenda superar la actual crisis. Pero, por sus prolongados efectos, la política económica más exitosa no podrá evitar que se paguen altos costos económicos y sociales. Por esa causa, el tema crucial a discutir ya no radica en la definición de los objetivos y en la elección de la mejor estrategia sino en la relación que existe entre las distintas propuestas y la definición explícita de los sectores sociales en los que, por distintas razones, debe recaer la mayor parte de esos costos.

Aunque fragmentario, el debate entre las distintas propuestas de "salvataje" ha comenzado a desarrollarse en los ámbitos académicos y en algunos medios periodísticos, pero en absoluto contrasta con ellos, se halla prácticamente ausente tanto entre los funcionarios gubernamentales como entre representantes, líderes y partidos políticos.

Los problemas son abordados cuando resultan insostenibles y emergen con tal fuerza que no pueden ser ocultados ni soslayados por mucho tiempo. Así pasó, entre muchos otros, con la cuestión del aumento insostenible de las tasas de interés que desestabilizaron al ministro Machinea y desembocaron, primero, en lo que se denominó "blindaje financiero" y luego en el "megacanje", operaciones coyunturales de ingeniería financiera pactadas en secreto, presentadas como hechos consumados y sólo escuetamente justificadas por la imperiosa necesidad de superar, en cada circunstancia, alguna de las tantas situaciones de "crisis" que se vienen sucediendo.

Algo similar ha venido ocurriendo con el agravamiento de la cuestión social. La discusión de este asunto cada vez está más presente en la temática que abordan los políticos de oposición, en discursos que, en realidad, al referirse a ella la deforman, la eluden, la desconectan de sus orígenes. Por su parte, el gobierno se muestra indiferente tanto en sus mensajes como en el diseño de las políticas públicas. Pero, a diferencia de los grandes problemas económicos, que por su alto valor estratégico siguen siendo abordados casi en secreto dentro de la nueva red de instituciones que ha privatizado la política gubernamental, la actividad innovadora y cada vez más intensa de los desocupados "piqueteros", cortando rutas en todas las regiones del país, ha colocado a la "cuestión social" de Argentina en el centro de la escena política.

Actualmente la indigencia, la pobreza, la caída y la redistribución regresiva de los ingresos forma parte de los mensajes periódicos de algunos "formadores de opinión", incluida la Iglesia; el grave problema de la desocupación ha comenzado a formar parte, incluso, del discurso del Gobierno y de los políticos. Desde hace tiempo, la medición y la descripción de los distintos aspectos ligados a esos problemas forman parte de la entrega cotidiana de la prensa especializada. "Los últimos cortes de ruta están colocando la cuestión social en el lugar donde debería haber estado desde hace mucho tiempo pero que fue sistemáticamente esca-moteada por los políticos".

No obstante, la creciente exposición de esas observaciones se halla cada vez más distante del análisis y reflexión sobre las causas y, especialmente, la naturaleza de las políticas económicas y sociales de contención que pueden comenzar a remediar esta situación; no es posible establecer conexiones entre esos fenómenos y los procesos de desestructuración social que ha generado la evolución del modelo neoliberal. Se puede hablar del tema, pero es ilusorio esperar un debate amplio y una elaboración de propuestas que trascienda el forcejeo político por controlar las infimas sumas destinadas a paliar las situaciones más críticas, o la cínica simplificación neoliberal apoyada en la teoría del derrame, es decir, de la ortodoxia según la cual cada uno de esos problemas se resolverá con mayor inversión y crecimiento.

En efecto, por imposición de las circunstancias, es decir, por el aumento de denuncias, reclamos y protestas, la cuestión social "se habla", muchas veces se parlotea, pero no se piensa. Forma parte, entonces, de un conjunto de temas que, por la evidente percepción que tiene la mayoría de la población, se transforman en pseudo cuestiones. En unos casos se describen, en otros se desestiman y en la mayoría se mencionan, pero al ser analizados son deformados y desnaturalizados sistemáticamente.

Política monetaria, endeudamiento, déficit externo, redistribución regresiva del ingreso asociada a la política fiscal y déficit fiscal, son los componentes centrales de una crisis económica que reconoce una causa anterior y fundamental: el déficit de la dotación, de la acumulación y de la inversión de capital que, retroalimentándose perversamente, explican el atraso, la inestabilidad, la vulnerabilidad, el estancamiento y la declinación de la economía en la actualidad.

Sin embargo, ninguna de las múltiples conexiones que explican el estado de estancamiento, declinación y crisis que signan la economía y la sociedad ha sido incorporada al discurso público ni a la oferta electoral. Algo similar ocurre con el ocultamiento de problemas menos acuciantes pero igualmente graves tales como: la aceleración del proceso de desindustrialización, el rol central de las empresas monopólicas de servicios y su relación con el comportamiento de la nueva cúpula empresarial extranjerizada y superconcentrada, la crisis de las economías regionales y su relación con la debilidad del sector exportador; además de aquellos, menos ocultos, que conforman la acentuación del estado de decadencia social, como el decrecimiento y deterioro del conjunto de los servicios prestados por el Estado (salud, educación, seguridad, previsión social, etcétera).

El mensaje posibilista

Por su propia naturaleza y por el evidente fracaso en lograr los objetivos propuestos, hace tiempo que los proyectos transformadores de la concepción neoliberal sólo concitan la adhesión de una minoría de la población; no pueden generar consensos mayoritarios ni aportar una base de legitimidad estatal más o menos permanente. Por eso obligan a diseñar una minuciosa división del trabajo en el seno mismo de la corporación: son elaborados en semisecreto dentro de las nuevas usinas privadas de proyectos específicos (consultoras, fundaciones, organismos internacionales, etcétera), son presentados, difundidos y justificados abiertamente por los nuevos especialistas mediáticos (periodistas especializados, consultores, etcétera) y son astutamente escamoteados a través de una serie de discursos elusivos por los dirigentes de los partidos políticos, especialmente en los periodos electorales (el periodismo especializado ya ha comenzado a "denunciar" el ominoso escamoteo de la gravedad de la crisis económica que están haciendo los principales candidatos en la próxima campaña electoral) (Nielsen, 2001b).

De ese último proceso, basado en la sustracción de los grandes problemas a la discusión política en los espacios públicos por parte del elenco político, y su reemplazo por una serie de discursos elusivos, circunstanciales y de justificación indirecta nos ocupamos en este inciso.

Esta nueva modalidad de "hacer política", despojándola de todo su real potencial transformador, se basa en la sofisticada construcción y en la insistente reproducción de un mensaje a la sociedad que denominamos "el mensaje de la impotencia" y que constituye, por otra parte, uno de los componentes fundamentales de los procesos que tienden a transformar, como vimos, la "desafiliación" en "desafección". El mensaje de la impotencia tiene, por tanto, tres objetivos:

a) El objetivo inmediato es organizar exitosamente el espectáculo electoral, frivoliándolo, vaciándolo de contenido;

b) El objetivo específico es la justificación de cada una de las medidas estatales que conducen directamente a, o que permiten, la ejecución de las medidas expropiadoras que alimentan la estrategia del despojo;

c) El objetivo mediato es más trascendente, tiene efectos más profundos y duraderos: se trata de lograr que adquiera carácter dominante en la representación de nuestra identidad una vieja premisa, definitoria de los mecanismos de construcción de hegemonía: "nos convertimos en aquello que creemos, o que nos hacen creer que somos", aún cuando eso que creemos o que nos inducen a creer sea fragmentario, interesadamente deformado o directamente falso y se nos convierta en una imagen de efectos perversos que destruye toda posibilidad de generar sentimientos de identidad y autonomía y de transformar potencialidades ocultas en la capacidad de llevar adelante proyectos de cambios sociales e individuales. Se basa, como veremos, en la "naturalización" de un proceso histórico de pérdidas y derrotas de los sectores populares que se ha transformado actualmente en una situación de indefensión. Desde esa posición de indefensión se traslada toda, absolutamente toda la capacidad de modelar el destino propio y

ajeno a una nueva generación de poderes indefinidos, omnímodos y misteriosos, es decir, inidentificables, que marcan el rumbo de nuestro universo y se expresan a través de sus "intermediarios", nuestros amigables aunque temibles interlocutores políticos.

Este reconocimiento del no-poder de los sectores populares y de las organizaciones sociales y políticas que pretenden representarlos, tratando de resguardar sus intereses y sus derechos adquiridos, alimenta de un modo cada vez más extendido un nuevo tipo de mensaje y un nuevo modo de definir el alcance y la función de la política en democracia que denominaremos "el posibilismo"; un fenómeno ideológico-político que se alimenta de una mezcla de proporciones cambiantes entre "hipocresía", "cinismo" y "pragmatismo".

A pesar de sus innumerables variaciones, "el posibilismo" se construye alrededor de tres ejes centrales: la producción de un complejo y multivariado mensaje de inanición e impotencia que denominaremos "imposibilista"; la transformación de esa ideología imposibilista en "sentido común", es decir, en un criterio que se halla inadvertidamente presente en los procesos de representación y análisis de la realidad social circundante; y, por último, en la transformación de la impotencia que genera esa creencia o esa convicción "imposibilista" en la base de un también complejo, multivariado y opaco proceso de "chantaje político" respecto a los problemas de la gobernabilidad y de la estabilidad del régimen democrático.

La rapidez con que ha penetrado y se ha difundido esta forma dominante de representación de la realidad en diversos sectores de nuestra sociedad se debe a una múltiple combinación de factores, entre los cuales tendremos en cuenta aquí sólo aquellos que forman parte del complejo operativo de alusión-elusión-negación de problemas que son producidos en casi todas las instancias institucionales y no institucionales de la sociedad, el sistema político y el Estado. Esta forma dominante de representación de la realidad se alimenta y se "enriquece", además, por medio de su propia reiteración, haciendo desfilar una serie ininterrumpida de símbolos, ideas, nociones, representaciones, estructuras argumentativas, axiomas "naturalizados", imágenes, procedimientos políticos y criterios valorativos. Las formas en que algunas de estas variantes son construidas o los modos en que las variantes pueden ser combinadas entre sí, nos brindan lo que podríamos denominar las subespecies generadoras de la ideología imposibilista.

A diferencia del neoliberalismo, la ideología imposibilista no es explícitamente justificatoria de la existencia de estructuras de explotación, de dominación o de poder en la sociedad; tampoco considera que la desigualdad social refleja, a su modo, inevitable y positivamente, las diferencias de aptitudes, capacidades y actitudes de individuos o de grupos entre sí. Condena a veces explícitamente las múltiples situaciones de injusticia que alimentan la profundización de las desigualdades materiales, sociales y culturales. La ideología imposibilista parece tener siempre presente el problema de la injusta distribución de la riqueza y, en su punto más extremo, puede ensayar, incluso, algún discurso de carácter igualitario. Su particularidad no reside en la definición de objetivos, ni en la enunciación

de valores, sino en el diagnóstico que elabora respecto de las nuevas propiedades de las estructuras de dominación y la imposibilidad que tienen actualmente las clases subalternas y también los Estados nacionales de modificarlas, a causa de las férreas relaciones de poder que han construido y consolidado operando desde el ámbito del mercado.

El supuesto general de la ideología imposibilista es, precisamente, que las transformaciones tecnológicas, económicas, culturales e institucionales producidas en el mundo durante los últimos veinte años han eliminado, en la práctica, todas las formas de autonomía y libertad que las clases subordinadas habían logrado durante la compleja historia de luchas y enfrentamientos protagonizada a lo largo del siglo XX. Tal pérdida ha influido sustancialmente en la extinción de cierto tipo de ideología, en la desaparición de la idea de proyecto político, en la radical transformación de sus antiguos portadores –las organizaciones corporativas y los partidos políticos– y, sobre todo, en la pérdida de funciones, de autonomía y de poder del Estado.

La ideología imposibilista se define, entonces, por el contenido del diagnóstico que elabora: los poderosos son más ricos, influyentes y autónomos en todo sentido, a la vez que el resto de los mortales tienen su destino atado a los modos en que aquéllos ejercen ese poder y definen los rasgos de las nuevas sociedades. Por lo que hemos visto, ese modo de ejercer el poder desde los diferentes monopolios económicos, sociales y políticos los vuelve más pobres, menos necesarios, más heterónomos, con mucho menos capacidad para discutir las condiciones que les imponen los poderosos y sin capacidad alguna para construir otra forma de poder alternativo. A pesar de sus variantes, es siempre un discurso conservador, inmovilista, articulado a la reproducción de lo ya existente, receptor pasivo y acrítico de las innumerables restricciones que presenta la realidad actual y justificador de la inanición derivada del reconocimiento del escaso margen que se tiene para construir cursos de acción alternativos y proyectos que por ser diferentes devienen en empresas imposibles. Es un discurso negativo que no convence, que no se apoya en importantes núcleos racionales ni desarrolla argumentos atrayentes, es un discurso que asusta, que ensombrece, que minimiza, que nos hace sentir mucho menos de lo que fuimos y mucho más de lo que seremos. Es, en definitiva, un discurso de muerte.

Por reunir estas características se ha convertido en el mensaje preferido de la fracción propiamente política del elenco megacorporativo, responsable de construir una oferta política capaz de atraer al mayor número de electores. Si tenemos en cuenta que la mayor fuente de legitimidad del Estado corporativizado ha sido hasta ahora el consenso y la participación electoral, el discurso posibilista es un discurso de mediación simbólica que genera formas de representación y de reflexión adaptadas, a su vez, al papel de mediación y disimulo respecto de las estrategias generadas en el seno del poder que ejercen partidos, representantes y operadores varios del sistema político.

Con el avance de la crisis en los dos últimos años, el "imposibilismo" se ha difundido mucho más que en la década pasada; se ha convertido en el único

recurso justificatorio de las políticas oficiales y también de las actitudes de acompañamiento cómplice de la oposición. Pero, esa especie de uso indiscriminado de la justificación posibilista, que puede hallarse hasta en la presentación de las más pequeñas decisiones estatales y en el discurso de los funcionarios más insignificantes, ha comenzado a mostrar la naturaleza de las verdaderas intenciones que la alimentan, las grandes falencias de su estrategia argumentativa y el tipo de parálisis institucional que está provocando (O'Donnell, 1992; Pasquini Durán, 2001a).

Veamos ahora cuáles son los rasgos más visibles de algunas de sus formas específicas.

1. El "*imposibilismo puro*". Trata de paralizar las débiles formas de resistencia social y de enfrentamiento político que han venido generado algunos de los grupos afectados por la gran ofensiva expropiadora del Estado y del sector empresarial, provocando terror hacia un futuro aún peor que el menguado presente. Se apoya, primero, en la construcción de un diagnóstico del estado de correlación de fuerzas actual dominado absolutamente por la fortaleza e impunidad de los poderes ya constituidos. Continúa demostrando que, al contrario de lo que ocurre con esos poderes, la fragmentación social, la pérdida de identidad, la falta de iniciativa y la insistencia en definir enfrentamientos y utilizar métodos de acción anticuados y obsoletos sólo puede conducir a una derrota de efectos mucho más devastadores que los que la ofensiva expropiadora ha venido generando. Haciendo referencia al célebre enfrentamiento de los escuadrones de la caballería polaca a las divisiones blindadas alemanas durante la invasión a ese país durante la Segunda Guerra Mundial, el columnista J. Nielsen (2000) plantea en una magnífica exposición los problemas que enfrenta esta forma de pensamiento. En un artículo denominado precisamente "La caballería polaca" dice:

Pero ya estamos en el año 2000. (La huelga general), lejos de obligar al gobierno a humanizar el modelo, al golpearlo, lo priva de alguna posibilidad de atenuar el impacto de las transformaciones que están en marcha. Ante cada nuevo indicio de que la Argentina se resiste a entregarse plenamente al orden globalizado que, a pesar de todo está consolidándose, el mercado reacciona bajándole el pulgar, forzando al gobierno de turno a tratar de aplacarlo con medidas aún más feroces.

La conclusión lógica que el lector extrae de su largo razonamiento es siempre la misma: es justo pero imposible; el intento es simpático pero estéril y peligroso; es necesario adecuar la magnitud de la demanda a los medios para obtenerla; es necesario pero sumamente riesgoso porque puede provocar represalias de efectos aún peores.

2. El "*imposibilismo cínico*". Con esta calificación hacemos referencia a su intención de ocultar deliberadamente, mediante un discurso sumamente coherente, ciertos datos de la realidad o ciertas intenciones que, de volverse evidentes, pueden perjudicar los intereses inmediatos o el desarrollo de estrategias de acción a

los que ese razonamiento se refiere. Es construido a partir de una falsificación, una omisión o una mentira evidente. Una de las más breves y elocuentes ilustraciones de esta modalidad de introducir impunemente en medio de un razonamiento la mentira más cruda y evidente nos la brinda la siguiente justificación del presidente De la Rúa.

En el escueto discurso donde anuncia la disminución del 15 por ciento de los salarios de los empleados estatales implementado para lograr un equilibrio absoluto de las cuentas fiscales, plantea la cuestión del siguiente modo: este recorte de salarios no es un "ajuste", es decir, una disminución de los ingresos de los sectores sociales directa e indirectamente afectados por la medida; un "ajuste" sería la consecuencia de una devaluación de la moneda porque en ese caso se "metería la mano en el bolsillo de la gente". Como se ve, nos hallamos frente a una falacia: la devaluación es expropiatoria porque sustrae ingresos a través de la inflación y la modificación de los precios relativos en el mercado; pero la reducción directa y unilateral de salarios a los empleados públicos no es confiscatoria porque, suponemos que supone el presidente, no se obtiene a través de los mismos mecanismos que desata la devaluación inflacionaria. (De la Rúa, 2001).

Para no reiterar el contenido negativo y "aterrador" de las otras modalidades del imposibilismo, la influyente tecnocracia política, íntimamente ligada a los organismos internacionales y comprometida con la gestión gubernamental, ha comenzado a elaborar este tipo de razonamiento que pretende ser realista, positivo y progresista pero que se transforma en un discurso mistificador e increíblemente cínico. Puede ser considerado, también, como una nueva especie de ideología justificatoria de cierto sector progresista-periférico que anida en los partidos tradicionales.

La derecha, en cambio, no necesita ser cínica, se apoya en los postulados de la sociedad de mercado para proponer medidas aún más radicales. Da por sentado que la grave situación de decadencia social que viven los países periféricos en general y, la Argentina en particular, es un hecho irreversible que no puede ser modificado sino asumido como un dato incontrastable de esta nueva realidad.

La función de la política será, entonces, eliminar las conquistas sociales existentes y transformar o eliminar las instituciones ligadas a ellas para dar lugar a la aplicación de un nuevo tipo de justicia distributiva. Es un nuevo criterio de reducción de gastos o de despojo de antiguos derechos adquiridos, justificado por la necesidad de redistribuir lo existente entre esos derechohabientes y un gran sector social que ya ha sido expropiado y, por esa causa, ha quedado totalmente excluido de los "beneficios". Es un intento de hacer pasar la reducción de ese gasto estatal o la virtual liquidación de alguna de esas instituciones como la necesidad de introducir reformas que generen la incorporación de esos sectores ya excluidos en un nuevo esquema que, de concretarse, genera un hasta entonces desconocido mecanismo de nivelación hacia abajo, de movilidad ocupacional y social descendente. Se trata de un planteamiento que evita considerar a esos excluidos como víctimas de un injusto proceso de despojo que la política debe reparar, tratando de reintroducir por diversos medios a los excluidos dentro del

sistema que ellos están administrando. Esa omisión transforma a la decadencia en un hecho "natural" y a la exclusión en un hecho irreversible.

El carácter definidamente cínico de esta argumentación no surge solamente de sus propósitos y de su forma de construcción, sino de la evidente falsedad de sus premisas y del ocultamiento de sus verdaderos objetivos. En efecto, estos planteamientos aparecen cuando el sector político tecnocrático del elenco gubernamental se siente obligado a introducir alguna de las innumerables reformas destructivas que han venido proponiendo el FMI y demás organismos internacionales. Políticas de "ajuste" destinadas a ampliar la esfera de negocios del capital privado, a reducir los ingresos del sector asalariado o comprimir los gastos del sector público para obtener ahorros destinados a mejorar la capacidad de pago de la deuda externa. Lo anterior puede ser verificado analizando, entre otros, el discurso del ministro A. Flamarique destinado a justificar la introducción de reformas a la ley laboral existente. En esa ocasión, el proyecto de "flexibilización" se había convertido en una condición ineludible del FMI para negociar nuevos préstamos, condición que fue negada y encubierta con el argumento de que tal "flexibilización" deterioraba las condiciones de contratación existentes pero iba a generar, como contrapartida, un importante aumento de la demanda de trabajo y una reducción de la desocupación.

Con la misma lógica razona H. Gerchunoff, jefe de asesores del ministerio de Economía, para justificar una nueva reducción de los aportes estatales al régimen de previsión social; también Dante Caputo, secretario de Ciencia y Técnica, para justificar la eliminación de la "carrera de investigador" en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y Colombo, jefe del Gabinete de Ministros, para explicar la necesidad del ahorro de gastos mediante la reforma-achicamiento-modernización de la estructura del Estado. Puede verse el análisis crítico de este tipo de argumentación en un artículo publicado por un diputado nacional de la Alianza gobernante (González, 2000).

3. El "*imposibilismo hipócrita*". A diferencia de la anterior, esta forma de imposibilismo no se basa en un razonamiento sino en un mensaje más complejo, compuesto precisamente por la contradicción flagrante que el receptor percibe entre el contenido de ciertos discursos específicos y la conducta institucional de representantes, dirigentes y partidos. Funciona del siguiente modo: se construye una visión, un diagnóstico o una propuesta de transformación de alguna de la innumerable cantidad de situaciones específicas y de iniciativas gubernamentales que nos han llevado al estado actual de decadencia; luego se la niega en los hechos tomando decisiones políticas que favorecen la aprobación de las situaciones e iniciativas criticadas y se obstaculiza el desarrollo de proyectos contrarios o alternativos.

En el momento de explicar tales incongruencias se apela siempre al mismo recurso: la inesperada aparición de factores externos amenazantes e incontrolables que obligan a ceder para evitar males mayores, postergando los objetivos originales para una nueva oportunidad en la que el contexto general o la correlación de fuerzas políticas resulte más favorable.

El denominado "Pacto de Olivos" entre el ex presidente Raúl Alfonsín y el entonces presidente Carlos Menem, que destrabó los procedimientos institucionales que permitieron la reelección de este último, constituye un ejemplo paradigmático, pero no el único. En su obsesión por presentarse como un político progresista, de "centro-izquierda", como gusta denominarse, el Dr. Alfonsín ha protagonizado un torrente de situaciones en las que realiza críticas y propone políticas antiliberales que luego son negadas en la práctica por él y por sus partidarios. En el curso del año 2001 se destacan claramente dos grandes mensajes: las nítidas contradicciones entre las críticas y las acciones destinadas a facilitar la aprobación parlamentaria de los "poderes especiales" otorgados al Presidente por la Legislatura de la Nación solicitados por el ministro de Economía, Domingo Cavallo; y la promulgación, en condiciones irregulares, de la ley denominada de "déficit cero", también presentada por iniciativa de Cavallo.

Otra variante del mismo procedimiento puede hallarse en la naturaleza casi permanente del doble discurso de los más altos dirigentes del Frepaso después de haberse integrado al gobierno de la Alianza. Una fuerte evidencia la aporta, por ejemplo, el testimonio de O'Donnell, asesor del vicepresidente Carlos Álvarez en cuestiones de reforma del Estado, respecto del papel que han jugado algunos de estos dirigentes en la elaboración y gestión de un proyecto de reforma de las leyes electorales, destinadas a erradicar procedimientos que estaban privando de transparencia a esa instancia político-institucional. Allí se comprueba que al mismo tiempo que Carlos Álvarez trata de esclarecer los sobornos en el Senado de la Nación, como una forma de iniciar una lucha de largo aliento con la vieja práctica política corporativa que culminó con su renuncia a la Vicepresidencia de la Nación, avala la mutilación de las reformas introducidas en la nueva ley electoral para no generar enfrentamientos con las "maquinarias partidarias" (O'Donnell, 2001).

Ante el evidente fracaso de la estrategia socioeconómica del conservadurismo neoliberal han aparecido otros ejemplares de la misma especie; sólo mencionaremos algunos de ellos. El más importante por sus efectos paralizantes es el que denominamos "imposibilismo apocalíptico", basado en una grosera estrategia discursiva que no trata de convencer con argumentos racionales sino de inhibir con pronósticos aterradores. Puede resumirse en breves términos: o seguimos profundizando las políticas de ajuste "recomendadas" por los organismos internacionales, desechando toda posibilidad de modificar sus parámetros fundamentales, o habrá una huida masiva de los capitales invertidos en el país que producirá un colapso en la economía con imprevisibles consecuencias sociales, institucionales y políticas. Esta forma de argumentar se emparenta fuertemente con otra variante que se funda en los intentos de mantener la supervivencia del denominado "pensamiento único". Se resume del siguiente modo: lo que proponemos es insuficiente o injusto y generará resultados dudosos y controvertibles pero es lo mejor porque es lo único que tenemos; no existen propuestas alternativas.

Una variable menos ambiciosa es la estrategia de "culpabilizar a la víctima" que forma parte del discurso anterior pero que actualmente se esgrime en forma

separada. Consiste en hacer responsables del fracaso del modelo neoliberal a sus propios ejecutores por no haber sabido continuar y profundizar las reformas estructurales destinadas a facilitar un mejor funcionamiento de la economía de mercado, eliminando o privatizando los muy pocos servicios que aún quedan a cargo del Estado.

La misma percepción del fracaso del modelo neoliberal está generando una estrategia discursiva igualmente perniciosa pero de contenido diferente. Se basa en un nuevo tipo de flagrante contradicción entre el contenido de las críticas al modelo neoliberal en el momento actual, y la grave responsabilidad que han tenido esos mismos críticos en su implementación política y en su justificación ideológica en el pasado inmediato. Por esa razón lo denominamos el "discurso posibilista inadvertido". Su primer y mayor exponente ha sido el Dr. Eduardo Duhalde, ex vicepresidente del gobierno del Dr. Menem, ex gobernador por el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires y candidato presidencial del mismo partido en la última contienda electoral. Como sus cargos lo indican, el Dr. Duhalde ha sido uno de los miembros más conspicuos de la megacorporación y uno de los principales responsables políticos de la implantación de ese modelo en la década de los noventa. Antecedentes que pasan precisamente "inadvertidos" en el momento de criticar los problemas de funcionamiento y el alto grado de injusticia de las estrategias expropiadoras de bienes materiales y conquistas que él ayudó a consolidar, desarrollando la ideología y la práctica que ha culminado con el estado de despojo simbólico de los sectores sociales expropiados que observamos en el momento actual.

El escenario y la lógica de la extorsión política.

El golpe de mercado

La actuación y la transmisión de la ideología "posibilista" reducen, como señalamos más arriba, los horizontes del pensamiento y la acción, producen impotencia e intentan congelar todo aquello que no sea competencia electoral, llegando en esa pretensión hasta límites inimaginables.

En la dinámica de los conflictos de baja intensidad que forman parte de la controversia política cotidiana, se busca la descalificación de los argumentos "del otro" a través de una nueva y simple forma de extorsión: aquello que afirma, hace o pretende el adversario no es analizado por su contenido sino por sus efectos, pero no por los efectos buscados en esa proposición sino sobre otros, sobre las consecuencias, generalmente negativas, respecto a la paz social, la estabilidad económica y, muy especialmente, al comportamiento de esos poderes intangibles e inmodificables que anidan en los mercados y fijan en cada circunstancia el límite de "lo posible". El ejemplo más sintético de cómo se organiza esta estrategia extorsiva desde el mismo poder gubernamental lo podemos hallar en recientes declaraciones del presidente De la Rúa. Cuando tuvo que dar su opinión a los periodistas sobre un hecho meramente circunstancial —la suspensión del diálogo con el gobierno central adoptada por los gobernadores peronistas, a

causa de la interrupción de los flujos financieros comprometidos por la Nación hacia las provincias—, eludió la sustancia de la cuestión, desestimó el análisis de sus causas y dijo: “lo único que se logra con estos planteos es poner nerviosos a los mercados y aumentar el riesgo del país”.

De más está decir que bajo diversas variantes este tipo de argumentos elusivo-extorsivos son permanentemente reiterados, tanto con la palabra como con la acción, y aún con la omisión por una enorme variedad de actores del elenco político gubernamental en las más diversas circunstancias. El ejemplar más escandaloso de esta especie lo aportó el economista neoliberal G. Calvo en un reportaje realizado en Estados Unidos pocos días después. “Lo que ha aumentado el riesgo del país en estos días han sido las caricaturas de Nik en el diario *La Nación*” (Muleiro, 2001a).

Aunque se emparenta con el mensaje imposibilista por sus objetivos, la variante extorsiva-apocalíptica se construye de un modo diferente: en lugar de eludir, alude de un modo explícito al contenido de las acciones, procedimientos, ideas y propuestas que pretende descalificar pero los deforma, modifica su sentido y sobre todo, magnifica sus efectos. La denominamos “interpretación apocalíptica” porque relaciona lo dicho o hecho por “el otro” con la generación de un futuro caótico, de desorden, descontrol, miseria y/o violencia social.

El gobierno de la democracia invierte la secuencia tradicionalmente establecida de la lucha política tomada como expresión y forma de resolución del conflicto social para transformarla en una nueva fuente generadora de frenos y obstáculos a la canalización política del conflicto social, mediante la amenaza y la extorsión que se desprenden del mensaje apocalíptico. La actuación y la transmisión de la ideología “posibilista” reducen, como señalamos más arriba, los horizontes y producen impotencia; la amenaza de ingobernabilidad y caos social con su secuela de miseria y violencia incontrolable del mensaje apocalíptico se complementa con todo lo anterior, generando pánico e inanición. Se desarrolla a partir de una de las pocas certezas que atormentan a sus interlocutores: la traumática sucesión de derrotas militares, sociales y políticas en las cuales quedó involucrada la mayoría de la sociedad, cuando no la sobrevivencia del entramado social mismo durante el transcurso de los últimos cuarenta años. Una superposición de experiencias profundamente negativas que ha venido generando una firme convicción fuertemente compartida: los valores supremos a resguardar son, después del ingreso y la ocupación, la seguridad y la armonía social, garantizadas por la gobernabilidad y la estabilidad institucional. Todo aquello que atente seriamente, de cualquier modo, contra esos objetivos logrados con ingentes sacrificios y vigentes ahora en medio de un clima de tolerancia y paz, son intolerables porque vuelven a ubicar en el horizonte los escenarios de la incertidumbre, la inestabilidad, la inseguridad y el temor por el futuro.

La visión del Apocalipsis se construye comprobando primero, la desobediencia (es decir la transgresión de los límites de lo posible) y estableciendo, después, un vínculo simbólico casi directo entre esa transgresión y la amenaza de fuga de capitales al exterior, la descomposición económica, la desarticulación del sistema

institucional y el comienzo de la disolución social. Todo esto producto de una presión no violenta que se ejerce desde el mercado por medios no coercitivos. Pero es una violencia legítima e inevitable porque aquello que puede ocurrir, la fuga y la desinversión, es producto del ejercicio legal de un derecho inalienable que la sociedad le ha otorgado al capital: la defensa unilateral de su integridad y sus beneficios dentro del marco exclusivo creado por las reglas que rigen el funcionamiento del mercado. La "ingobernabilidad" no es la consecuencia directa, entonces, como lo fue antaño, ni de la agudización del conflicto político, ni del crecimiento de las luchas sociales; proviene de las decisiones estratégicas que adopta el sector capitalista en su ámbito natural: el mercado. Pero el grado y el tipo de coerción institucional que produce dependen de las características de lo que podríamos denominar "primeras causas" o "causas disparadoras".

De acuerdo a lo que hemos estado viendo, estas causas son generadas en dos ámbitos diferentes: unas provienen de la lucha social y política contra la expropiación y el despojo; y las otras de las presiones que ejercen los inversores-especuladores del sector financiero para asegurar altas tasas y pagos puntuales y rigurosos de las obligaciones contraídas por el Estado. Tomando en cuenta sus rasgos predominantes, a las primeras las denominamos causas sociales internas y a las segundas económicas externas. La división tiene propósitos analíticos y no excluye que, como ocurre frecuentemente, se presenten en la práctica con distintas formas de combinación.

En ocasiones la extorsión interna y externa se combinan y potencian mutuamente. Por ejemplo, un mismo personaje del gobierno de la Alianza ha funcionado como vocero-ejecutor e integrador de ambos tipos de presiones. Por medio de un mensaje apocalíptico, de los ya analizados, solicita al Poder Ejecutivo que las medidas convenidas en secreto con el FMI sean aprobadas inmediatamente por decreto, aunque ello continúe degradando el funcionamiento institucional de la democracia y se coloque en flagrante contradicción con los postulados y la oferta electoral de la Alianza, generando, de ese modo, más impopularidad, aislamiento y debilidad gubernamental. Si no se toma en cuenta la advertencia, puede aumentar el peligro de un estallido de consecuencias mucho más graves: el cese de pagos, la fuga de capitales, el aislamiento internacional y la postergación *sine die* de la recuperación económica. Unos días después, cuando amplios sectores populares organizan una huelga general en oposición a esas medidas, vuelve a plantear el mismo tipo de extorsión, también apocalíptica, pero ahora destinada al consumo interno, al conjunto de la sociedad y especialmente a los atisbos de enfrentamiento que se advierten en los partidos de oposición.

La extorsión llega a tal punto que los propios mercados comienzan a preocuparse y tratan de determinar por sus propios medios el grado de veracidad y racionalidad que tiene esa visión apocalíptica. Condicionado por esa nueva e inesperada reacción, el Ministro intenta infundir tranquilidad en los mercados desnudando el contenido y la intención misma de la extorsión. Un día después de la huelga general llamó a conferencia de prensa y sus declaraciones inspiran el siguiente comentario periodístico: "Lo que llevó a *Machinea* a convocar a confe-

rencia de prensa fue la convicción de que había que ratificar señales tranquilizadoras a los mercados" (*Página 12*, 2000). En efecto, enredado en su mismo mensaje apocalíptico, el Ministro ingresó en un callejón sin salida. Al poner en evidencia que la situación argentina seguía siendo grave y que sin la aprobación de la ayuda financiera solicitada al FMI había riesgo de llegar al cese de pagos, generó un clima tan dramático que provocó la reacción inversa de sus funcionarios. Un país aprisionado entre la amenaza del caos social, la ingobernabilidad y el cese de pagos debía recibir una atención especial que no era compatible con el tipo de negociación "normal" que se estaba llevando a cabo. Para poder recuperar los términos iniciales de dicha negociación, el gestor del clima apocalíptico debió dar marcha atrás, desdecirse de su diagnóstico y dejar al descubierto, como si se tratara de una carta marcada, sus propósitos extorsivos.

Cuando esta forma de articulación entre discurso posibilista apocalíptico, presión del capital financiero y de los organismos internacionales y extorsión político-estatal llega a su máximo punto de tensión se transforma en lo que varios analistas han denominado "golpe de mercado", en el momento de tratar de analizar situaciones en que la voracidad capitalista se combina con la debilidad política del elenco corporativo para impulsar una mayor profundización de la estrategia neoliberal y producir desplazamientos acordes con ese objetivo en el plantel gubernamental.

El discurso apocalíptico y el chantaje político se convierten en tal caso en los rostros visibles de un nuevo tipo de golpe de Estado que no opera como una "invasión" externa sobre el sistema político y gubernamental, del tipo "golpe militar", sino como un desplazamiento intrainstitucional que modifica la composición del elenco y/o las relaciones de fuerza existentes al interior del Estado: expulsión de unos, neutralización y absorción de otros, encumbramiento del resto. En ese sentido puede comenzar como un movimiento objetivo de capitales individuales relativamente coordinado pero que es convertido en un "mini golpe" de Estado por otros, los operadores políticos y económicos locales. Léase grupos neoliberales insertados dentro y en las proximidades del Gobierno, neoliberales con gran acceso a medios de comunicación, reformistas posibilistas cínicos y reformistas posibilistas hipócritas, asustados, que sobreactúan sus gestos y acciones complacientes con los mercados y los organismos internacionales.

Como el círculo virtuoso prometido entre "sacrificio-inversión-crecimiento-beneficio del capital-derrame al resto de la sociedad" del esquema neoliberal nunca ha funcionado, ni puede ser retóricamente justificado, los funcionarios y políticos comprometidos con ello han implementado una perversa estrategia alternativa que se basa en la transformación de las dificultades políticas y/o económicas recurrentes de los últimos tiempos, en un nuevo tipo de crisis apocalípticas que les han permitido mantenerse vigentes, lograr la aprobación de complejos paquetes de reformas antipopulares e imponerlos por el miedo o por la complicidad de diversos sectores sociales y políticos, debidamente justificados por los reiterados "estados de excepción" en que ingresa periódicamente la Nación.

Bibliohemerografía

- Acuña, A. (2000), "Introducción", en A. Acuña (coordinador), *La nueva matriz política argentina*, Buenos Aires, Nueva Visión.
- Adrogué, G. (1999), "El nuevo sistema partidario argentino", en A. Acuña (coordinador), *op. cit.*
- y M. Armesto (2001), "Los partidos políticos en la década del noventa", en *Desarrollo Económico*, Buenos Aires, vol. 40, núm. 160.
- Alfonsín, R. (2001), "Reportaje", en suplemento *Zona* del diario *Clarín*, Buenos Aires, 13 de mayo.
- Aliverti, E. (2001), "Una cuestión nacional", en diario *Página 12*, Buenos Aires, 15 de junio.
- Álvarez, C. (2001), "Respuesta", a Vicente Muleiro, "Los partidos y en el callejón", en columna del suplemento *Zona* del diario *Clarín*, Buenos Aires, 13 de mayo.
- (2001a), "Reportaje", en suplemento *Zona* del diario *Clarín*, Buenos Aires, 13 de mayo.
- Bazán, G. (2001), "Polémica por las comisiones de megacanje", en diario *Clarín*, Buenos Aires, 13 de junio.
- Botana, N. (2001), "La política devaluada", en diario *La Nación*, Buenos Aires, 17 de mayo.
- Basualdo, M. y M. Kulfas (2001), "Fuga de capitales y endeudamiento externo en la Argentina", en revista *Realidad Económica*, Buenos Aires, núm. 173.
- Cafiero, M. (2001), "Megacanje: nada para festejar", en diario *Clarín*, Buenos Aires, 11 de junio.
- Caro Figueroa, G. (1997), "Reportaje", en diario *La Nación*, Buenos Aires, 13 de noviembre.
- Chodos, G. (2001), "Hay un default político", reportaje, en suplemento *Cash* del diario *Página 12*, Buenos Aires, 3 de junio.
- Carrió, E. (2001), "La única banca sucia no es la de Moneta", reportaje en diario *Página 12*, Buenos Aires, 11 de mayo.
- (2001a), "Reportaje exclusivo", en diario *Página 12*, Buenos Aires, 3 de junio.
- Clarín* (2001), "Las comisiones del canje en la mira de la justicia", Buenos Aires, 12 de junio.
- (2001), "La iglesia cargó contra los partidos y los grupos de poder económico", Buenos Aires, 13 de mayo (reproducción del documento de los obispos de la República Argentina, *Hoy la patria requiere algo inédito*).
- De la Rúa, F. (2001), "Discurso del Presidente de la Nación anunciando las nuevas medidas económicas", en diario *Clarín*, Buenos Aires, 18 de julio.
- Feinman, P. (2001), "Cuestiones sencillas", en diario *Página 12*, Buenos Aires, 8 de junio.

- González, A. (2000), "Artículo", en diario *Clarín*, Buenos Aires, 22 de noviembre.
- Hagopian, F. (2000), "Democracia y representación política en América Latina en los años noventa: ¿pausa, reorganización o declinación?", en E. López y S. Mainwaring (editores), *Democracia: discusiones y nuevas aproximaciones*, Buenos Aires, UNQUI Ediciones.
- Jozami, A. (2000), *Ya nada será igual*, Buenos Aires, Sudamericana.
- Justo, M. (2001), "Ganadores y perdedores", en diario *Página 12*, Buenos Aires, 5 de junio.
- Liendo, J. (2001), "Reportaje", en diario *Página 12*, Buenos Aires, 4 de noviembre.
- Lozano, C. (2001), "Degradado bis del Plan Brady", en diario *Página 12*, Buenos Aires, 5 de junio.
- Montenegro, M. (2001), "Una hipoteca megacara para los que vienen", en diario *Página 12*, Buenos Aires, 7 de junio.
- (2001a), "El megaescandaloso reparto de la megacomisión de 150 millones", en diario *Página 12*, Buenos Aires, 13 de junio.
- (2001b), "El negocio de tener que pagar comisión por la plata propia", en diario *Página 12*, Buenos Aires, 15 de junio.
- Moreno, M. (2001), "Ahora la vida sale muy barata", en diario *Clarín*, Buenos Aires, 12 de junio.
- Mulerio, Vicente (2001), "Partidos y en el callejón", en suplemento *Zona* del diario *Clarín*, Buenos Aires, 13 de mayo.
- (2001a), "Nota sobre las declaraciones del economista G. Calvo", en diario *Clarín*, Buenos Aires, 1 de junio.
- Nielsen, J. (2001), "Un momento muy especial", en diario *Página 12*, Buenos Aires, 8 de junio.
- (2001a), "Revolución cultural o hecatombe", en revista *Noticias*, Buenos Aires, 9 de junio.
- (2001b), "Elecciones en Jauja", en diario *Página 12*, Buenos Aires, 28 de agosto.
- (2000), "La caballería polaca", en diario *Página 12*, Buenos Aires, 25 de noviembre.
- Notchef, H. (coordinador) (2001), *La economía argentina a fin de siglo: fragmentación presente y desarrollo ausente*, Buenos Aires, Flacso/Eudeba.
- Novaro, M. (1995), "El debate contemporáneo sobre la representación política", en revista *Desarrollo Económico*, Buenos Aires, vol. 35, núm. 137.
- (1999), "Crisis y renovación de los partidos", en VVAA, *Entre el abismo y la ilusión*, Buenos Aires, Norma.
- Nudler, J. (2000), "Nota", en diario *Página 12*, Buenos Aires, 4 de noviembre.
- (2001a), "Tan grande y caro que mete miedo", en diario *Página 12*, Buenos Aires, 2 de junio.
- (2001b), "Nunca se pagó tanto por un poco más de tiempo", en diario *Página 12*, Buenos Aires, 3 de junio.

- O'Donnell, Guillermo (1992), "¿Democracia delegativa?", en *Cuadernos del CLAEH*, Montevideo, núm. 61.
- (2001), "El capital financiero y el futuro de la democracia", en diario *Página 12*, Buenos Aires, 21 de marzo.
- Página 12 (2000), "Machinea y la dependencia del humor de los mercados", Buenos Aires, 25 de noviembre.
- Pasquini Durán, J. (2001), "Protagonistas", en diario *Página 12*, Buenos Aires, 9 de junio.
- (2001a), "Opinión", en diario *Página 12*, Buenos Aires, 14 de junio.
- Pucciarelli, A. (2000), "¿Democracia impotente o cómplice?", en *Revista Sociedad*, Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, núm. 16.
- Paramio, L. (1993), "Consolidación democrática, desafección política y neoliberalismo", en *Cuadernos del CLAEH*, Montevideo, núm. 61.
- Schor, M. y C. Lozano (2001), *Estado nacional, gasto público y deuda externa*. Buenos Aires, Instituto de Estudios y Formación de la CTA (policopiado).
- Touraine, A. (2001), "En la Argentina no hay política", reportaje reproducido en el suplemento *Zona* del diario *Clarín*, Buenos Aires, 13 de mayo.
- Zaiat, A. (2001), "El caganje", en suplemento *Cash* del diario *Página 12*, Buenos Aires, 20 de mayo.
- Zermeño, S. (1989), "El regreso del líder: crisis, neoliberalismo y desorden", *Revista Mexicana de Sociología*, México, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, núm. 4, vol. 51.
- Verbitzky, H. (2001), "Se acortan los plazos para definir entre devaluación y dolarización", en diario *Página 12*, Buenos Aires, 8 de julio.
- Vommaro, G. (2001), *Los sondeos de opinión y las prácticas políticas hoy*, Informe de beca UBACYT, Buenos Aires (policopiado).

Buenos Aires, primavera del año 2001